



ECONOMÍA POLÍTICA DE LOS CONFLICTOS

2 Introducción

3 Enmarcar un análisis feminista del Sur sobre la guerra, los conflictos y la violencia contra las mujeres: el valor de una perspectiva de economía política

9 Economía política de los conflictos y la violencia contra las mujeres en Sri Lanka: la construcción de

la mujer financieramente responsable

17 Acabar con los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres en la región de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea: el Estado, las industrias extractivas y la sociedad civil

26 Mujeres rurales en Colombia: de víctimas a protagonistas

36 "Periferia arraigada": Mujeres, economía política y el mito de la construcción de la paz en el noreste de la India

43 Reimaginar la subversión: agencia y activismo de paz de las mujeres en el norte de Uganda

52 El prisma de la marginación: La economía política de la violencia contra las mujeres en Sudán y Sudán del Sur



Introducción

Este número de DAWN Informa tiene por objeto dar a conocer el nuevo libro de DAWN, titulado *The Political Economy of Conflict and Violence against Women: Cases from the South* (La economía política de los conflictos y la violencia contra las mujeres: Casos del Sur) (Zed Books, Londres, 2019), y proporcionar una versión sinóptica para quienes, especialmente del Sur global, no puedan acceder a él. El libro se basa en el trabajo previo de DAWN para entender la violencia contra las mujeres en contextos de guerra, conflicto y transición. Los procesos

político-económicos de los conflictos están estrechamente ligados a la naturaleza de las relaciones entre la economía nacional y la economía mundial en los Estados nación poscoloniales del Sur global, y también dan forma a las secuelas de la transición, la reconstrucción, la recuperación y la paz tras los conflictos. Las ricas y variadas percepciones que aquí se presentan nos obligan a interrogar y matizar los marcos de análisis existentes que han tratado de comprender la violencia contra las mujeres en los conflictos y la guerra. ■

Enmarcar un análisis feminista del Sur sobre la guerra, los conflictos y la violencia contra las mujeres: el valor de una perspectiva de economía política¹

por Kumudini Samuel y Vagisha Gunasekera

Esta colección de ensayos se basa en el trabajo previo de DAWN para entender la violencia contra las mujeres en contextos de guerra, conflicto y transición. Lo que quedó claro en nuestro trabajo anterior fue que la guerra y el conflicto constan de dimensiones económicas y políticas internas y globales complejas y en múltiples niveles. Este entramado subyacente de procesos político-económicos de conflicto está estrechamente ligado a la naturaleza de las relaciones entre la economía nacional y la economía global en los Estados nación poscoloniales del Sur global. Por lo tanto, en la medida en que estos procesos están profundamente involucrados en las causas y en las consecuencias de la guerra y el conflicto, también dan forma a las secuelas de la transición, la reconstrucción, la recuperación y la paz después del conflicto. Estas ricas y variadas percepciones nos obligaron, por tanto, a cuestionar los marcos de análisis existentes que tratan de entender la violencia contra las mujeres en los conflictos y la guerra. Esta colección de estudios de caso es, en muchos sentidos, un modesto intento de desafiarnos a “leer” o “mapear” cómo se producen y reproducen los patrones de violencia contra las mujeres en las relaciones más amplias entre la economía nacional y la global, así como en las relaciones políticas (y militares) del conflicto moldeadas por los paradigmas ideológicos y políticos internos y externos predominantes y las contiendas geopolíticas. El volumen está dedicado a Vijay Nagaraj, intelectual, activista y coautor del ensayo sobre Sri Lanka, que falleció trágicamente antes de que el libro estuviera terminado.

**Nuestro punto de partida:
Los puntos de vista
dominantes sobre la violencia
en el establecimiento y la
construcción de la paz²**

La lucha feminista por sacar a la luz la violencia sexual y la violación en el ámbito privado consiguió politizar la violencia sexual como un acto relacionado con el poder social. El reconocimiento de la violencia contra las mujeres como delito en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de la ONU de 1993 fue un momento de victoria para el activismo feminista transnacional. Como resultado de las narrativas de las víctimas y los testigos que se desarrollaron en los tribunales penales internacionales en la década de 1990 para la antigua Yugoslavia, Ruanda y otros lugares, la violencia sexual se estableció como una parte integral de la guerra y no simplemente un efecto de la misma (Henry, 2013; Copelon, 1995; Charlesworth y Chinkin, 2000).

Esta articulación y la atención excepcional que se dio a la violencia sexual en tiempos de guerra, a pesar de su importancia crítica, dentro de los discursos feministas y de derechos y del derecho penal internacional (Lorentzen y Turpin, 1998; Skjelbæk y Smith, 2001; Moser y Clark, 2001; Manchanda, 2005; Giles y Hyndman, 2004) han tenido “consecuencias imprevistas” (Henry, 2013:97) que merecen un estudio más profundo. Los esfuerzos concertados de las feministas a nivel local y mundial para

convencer a los organismos políticos nacionales e internacionales de que reconozcan la violencia contra las mujeres como un crimen, también han dado lugar a una crítica en desarrollo de cómo se enmarca la violencia en el contexto de la guerra y el conflicto. La obsesión constante de la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos por parte del derecho penal internacional es que impone una jerarquía de gravedad a algunos crímenes sobre otros y silencia “narrativas alternativas” (Henry, 2013). También da lugar a que se eludan otros tipos de violencia física y psicológica directa y de violencia estructural.

Se ha argumentado, asimismo, que los errores éticos y políticos y la injusticia sistémica dentro de los contextos socioeconómicos más amplios de la guerra y el conflicto, así como el impacto del capitalismo global en las causas y las consecuencias de la guerra, son poco reconocidos o tratados por el derecho penal internacional y los juicios rara vez administran justicia sustantiva para las mujeres que buscan recuperarse después de la guerra (Bell y O'Rourke, 2007; Rees y Chinkin, 2016). Esto a menudo implica ocultar los efectos adversos generados por los modelos neoliberales de desarrollo, que tienden a ser las piedras angulares de los esfuerzos de reconstrucción y consolidación de la paz después de la guerra (Bergeron, et al., 2017).

Las feministas también han identificado las intervenciones económicas neoliberales inherentes a la pacificación internacional contemporánea y a la reconstrucción de posguerra como un desafío crítico para la paz sostenible, que debe incluir una agenda de género transformativa. A la luz de esto, debemos matizar este análisis para incluir una perspectiva de economía política que sea parte integral de la forma como se ve y se aborda la seguridad de género. Esta investigación debe tener en cuenta los retos de las economías devastadas por la guerra y la recuperación de la posguerra, teniendo en cuenta las realidades vividas por las mujeres, las desigualdades

experimentadas y las estrategias de supervivencia. Por lo tanto, el propósito de estos ensayos es utilizar un marco o una perspectiva de economía política para estudiar la violencia contra las mujeres teniendo en cuenta las desigualdades estructurales, contribuyendo así a una matizada y mejor comprensión de la violencia de género contra las mujeres en los conflictos y la guerra y a una respuesta más eficaz a la misma.

La necesidad de un marco de análisis de economía política

Para superar el actual estancamiento relacionado con nuestra comprensión de la violencia contra las mujeres durante la guerra y los conflictos, el primer paso es pensar de forma diferente sobre la guerra y los conflictos. Incluso hoy en día, existe un importante consenso en torno a la idea de que la guerra y los conflictos son una aberración de lo “normal”, y que estos estados indican una “perturbación” de procesos políticos, económicos, sociales y culturales que, por lo demás, son fluidos y no violentos. Cuando la guerra y el conflicto se tratan de esta manera, la “recuperación post-conflicto” implica automáticamente la consecución de “condiciones normales de la economía” que se suponen no violentas.

En este punto nos inspiramos en David Moore (2015) y Karl Von Holdt (2014), que ofrecen un marco de la guerra que tiene en cuenta la naturaleza estructural de la violencia. Sus ideas son similares en el sentido de que la guerra y el conflicto se conciben como momentos de erupción en “un curso continuo de formación de clase, ideológica y política en el contexto de los procesos de acumulación” (Moore 2015:2). La economía política feminista es útil para desentrañar la naturaleza de género de la violencia inherente a las estructuras económicas políticas nacionales y mundiales en relación con la guerra y el conflicto (True, 2012: 44). También son significativos los análisis con perspectiva de género de las economías políticas de la guerra

que ponen de relieve las relaciones políticas y económicas históricas y contemporáneas, locales y globales, que forman, producen y reproducen la violencia, así como la forma en que las guerras magnifican y remodelan las identidades de género (véase Raven-Roberts, 2013). Las revisiones de la acumulación por despojo realizadas por las feministas críticas señalan que las mujeres, la naturaleza y los pueblos de los países empobrecidos constituyen la base sobre la que se han establecido históricamente los procesos de acumulación capitalista, y su subordinación y explotación siguen siendo premisas esenciales que subyacen a la reproducción del modelo actual, por lo que es crucial comprender las interacciones, tanto históricas como actuales, entre las divisiones sexual, social e internacional del trabajo. Para este análisis es importante entender que la violencia está en el centro de la organización social, y que las relaciones de género y la violencia son mutuamente constitutivas (Confortini, 2006).

Un análisis de economía política nos obliga a comprender cómo las múltiples crisis generadas por la globalización y el desarrollo económicos, las políticas macroeconómicas resultantes, la liberalización del comercio, la desregulación económica, junto con las crisis financiera y climática y la militarización, plantean nuevos retos, especialmente para las mujeres (Seguino, 2010; Sen y Durano, 2014). Estas realidades del orden político-económico mundial a menudo están ausentes o se pasan por alto en los análisis de la violencia contra las mujeres. Los estudios de caso, que forman los ensayos de este DAWN Informa (DI) amplían e ilustran la violencia incorporada en los acuerdos políticos económicos de algunos de los sitios o lugares estratégicos donde las fuerzas económicas estructurales entran en juego, intensificando las condiciones para aumentar la magnitud de la violencia contra las mujeres. Como señalan los autores, su enfoque de la violencia de género durante la guerra, el conflicto y sus secuelas consiste en ver las continuidades y

discontinuidades de las dimensiones de género vinculadas al patriarcado y los impactos de los acuerdos económicos políticos diferenciales más allá de la temporalidad de la guerra. En conjunto, estos ensayos abogan por matizar y complicar estas perspectivas, lo que a su vez reforzaría los análisis sobre la violencia contra las mujeres y los conflictos.

Estos ensayos están escritos por feministas del Sur global, con una gran diversidad de antecedentes, experiencias y orientaciones académicas y disciplinarias. Trabajan en diferentes contextos políticos, económicos, sociales y culturales y algunas han abordado la escritura sobre las economías políticas de la violencia contra las mujeres en sus propios países tanto (o más) desde la experiencia vivida y las percepciones experimentales como desde la investigación formal o académica, lo que consideramos totalmente válido y acorde con la epistemología feminista.

Los ensayos exigen situar la violencia contra las mujeres dentro de las estructuras y las relaciones políticas y económicas históricas y contemporáneas, tanto a nivel nacional/subnacional como global. El ensayo sobre Colombia proporciona una comprensión rica en texturas de la economía política de la larga y compleja guerra del país, sus dimensiones de clase y las marcadas diferencias entre los tres protagonistas, arrojando luz sobre el importante, aunque no reconocido, papel de las mujeres rurales como protagonistas cruciales durante la guerra, y como agentes de cambio.

El estudio de caso sobre Papúa Nueva Guinea (PNG) se centra en el papel que desempeñan las industrias extractivas, de propiedad extranjera y devastadoras para el medio ambiente, en la exacerbación de la desigualdad de género e intracomunitaria y en la facilitación de la acumulación de armas y conflictos, con consecuencias aterradoras para las mujeres. El ensayo sobre Sri Lanka demuestra que el “icono” de la “mujer autónoma de la zona

afectada por la guerra” forma parte del impulso global hacia la financiarización y rastrea la violencia inherente a los procesos de “responsabilización” de género que, a su vez, refuerzan determinadas ideologías de género. El caso de la región del noreste de la India pone de relieve la represión estatal, la militarización, la “otredad” y la violencia cultural como modos de control y violencia de género en tres conflictos subnacionales y sus prolongados procesos de paz. El estudio de caso sobre Sudán y Sudán del Sur analiza la complejidad impuesta por las múltiples y superpuestas estructuras religiosas y consuetudinarias de control social. El ensayo sobre las iniciativas de paz de las mujeres del norte de Uganda examina tanto los cambios socioeconómicos y políticos de género que se produjeron como resultado de la guerra, como las formas en que la acción de las mujeres intentó subvertir las normas patriarcales. De los ensayos se desprenden una serie de temas que se comentan brevemente a continuación.

[A] MILITARIZACIÓN: violencia de género en un “estado de excepción”: En la mayoría de los estudios de caso, los autores observan que el poder patriarcal y las prerrogativas territoriales sobre los cuerpos de las mujeres se unen a los modos de poder y control inherentes a las luchas por las reivindicaciones territoriales, lo que a su vez produce y reproduce una violencia estructural de carácter claramente sexista. La militarización es uno de estos modos de control. Esto crea un “estado de excepción” en el que los ciudadanos y las ciudadanas se ven reducidos a la “vida desnuda”, o despojados de los derechos comunes de la ciudadanía (Agamben, 2005), lo que repercute negativamente a largo plazo en derechos democráticos como la libertad de expresión, asociación y movilidad, entre otros. Junto con el conflicto armado y la guerra civil, la militarización ha desempeñado un papel importante en la configuración y el cambio de la vida de las mujeres. Las guerras contemporáneas se producen en los lugares de las divisiones sociales más graves, generando concomitantemente múltiples formas de crisis (Laurie y Petchesky, 2007).

[B] EL CUERPO SEXUADO Y EL “OTRO” EN LA GUERRA Y EL CONFLICTO: Muchos de los ensayos analizan cómo la guerra y el conflicto configuran y refuerzan formas históricas y arraigadas de sexualidad. En Papúa Nueva Guinea, la cultura del “hombre grande” valora a los hombres y la violencia armada sigue siendo la norma para resolver conflictos nuevos y antiguos. Cometida por guerreros, esposas enfurecidas y anfitriones oportunistas de poblaciones desplazadas, la violación persiste como arma, y los marcos de justicia introducidos por las nuevas normas de paz parecen incapaces de disuadir las prácticas arraigadas de la masculinidad militarizada que sancionan el uso de la violencia física y sexual en el control de las mujeres (Cox, este DI).

[C] ECONOMÍAS DE GÉNERO DE LA GUERRA: Algunos ensayos se alejan del enfoque sobredeterminado de la violencia sexualizada, étnica y militarizada contra las mujeres, que es la narrativa predominante de la violencia experimentada por las mujeres en la guerra y el conflicto. Las autoras llaman la atención sobre la globalización neoliberal que ha transformado los procesos de acumulación por desposesión, dando lugar a múltiples formas de violencia estructural de género en tiempos de guerra y paz. Estos ensayos alejan el debate del marco esencialista de las mujeres como víctimas de la violencia y la guerra y de los hombres como sus autores. En todos los ensayos, explícita e implícitamente, se señala que la acumulación sigue estando respaldada por ideologías de género que mantienen el trabajo no remunerado de las mujeres en el hogar, que es un requisito previo para la productividad de los hombres en la esfera pública. Estas estructuras y procesos de género provocan y reproducen la violencia al restringir la participación pública de las mujeres y promover su subordinación y desigualdad tanto en el hogar como en la sociedad, lo que las hace más vulnerables a la violencia directa y estructural.

[D] LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, LA FAMILIA, EL HOGAR Y EL HOMBRE

PROVEEDOR: Es bien sabido que, durante los conflictos y las guerras, el statu quo de las familias y las comunidades se desmantela, lo que conlleva cambios de poder y de estatus, ya que las mujeres asumen funciones y responsabilidades que convencionalmente se consideraban propias de los hombres. El ensayo sobre Uganda analiza las múltiples vulnerabilidades de las mujeres, así como la desestabilización del dominio masculino y la apertura de espacios de poder parcial para las mujeres, ya que los cambios de roles y responsabilidades relacionados con el conflicto reconfiguraron las estructuras familiares y abrieron espacios agentivos para las mujeres. Algunos ensayos analizan cuestiones derivadas del refuerzo de las leyes consuetudinarias, a las que a menudo se da primacía sobre las leyes generales, en particular en lo que respecta a la propiedad de la tierra y los asuntos relacionados con la familia.

Por ejemplo, la Constitución india permite a estados como Mizoram y Nagaland elaborar sus propias leyes de manera que se ajusten a sus leyes consuetudinarias patriarcales. Las autoras señalan el peligro de pasar por alto los cambios en las estructuras familiares y las economías domésticas durante las guerras y los conflictos. Sostienen que el refuerzo de las leyes y las prácticas consuetudinarias (que suponen estructuras familiares tradicionales basadas en el hombre proveedor) durante y después del conflicto, empuja a las mujeres al borde de la vulnerabilidad.

[E] MUJERES, VIOLENCIA Y CONSTRUCCIÓN

DE LA PAZ: Varios estudios de caso analizan los procesos de construcción de la paz en los que se da un significado a la violencia más allá de la violencia sexual contra las mujeres. El ensayo sobre Papúa Nueva Guinea analiza las iniciativas de paz de las mujeres en la provincia de Jiwa-ka, detallando cómo las mujeres han desafiado las tradiciones machistas

de mediación de conflictos, negociación y planificación del desarrollo futuro. Al negarse a contribuir al pago de los impuestos de guerra efectivos de los que se apropian los hombres, las mujeres han asegurado sus ahorros frente a la constante demanda de los maridos para la compra de armas y municiones para continuar la guerra tribal.

Conclusión

Estos estudios de caso hacen especial hincapié en la centralidad de la violencia en la organización social y su papel en la producción y reproducción del orden de género, y a la inversa, en cómo el orden de género justifica y reproduce a su vez las relaciones de poder desiguales y violentas en la sociedad, que están firmemente ancladas en patriarcados superpuestos. Los ensayos establecen un contexto para las relaciones políticas y económicas que abarcan los modos históricos de acumulación y desposesión, centrándose en los que apuntalan la guerra y el conflicto contemporáneos y continúan tras la guerra, para argumentar que el conflicto y la guerra no pueden tratarse de forma simplista como una desviación de lo “normal”. Como señalan las autoras, su enfoque de la violencia de género durante el conflicto y su posguerra consiste en ver las continuidades de las dimensiones de género vinculadas al patriarcado y los impactos de los acuerdos políticos y económicos diferenciales más allá de la temporalidad de la guerra.

Cada escritora feminista se adscribe a un modo particular de poder y control, lo que determina su forma de “leer” y “cartografiar” la violencia. No todos los ensayos pretenden realizar análisis de economía política feminista. Sin embargo, sí se comprometen con ciertos elementos de un “método de economía política” al analizar la violencia en “lugares estratégicos” clave (Ertürk, 2009; True, 2012). Los autores analizan cómo las condiciones de la guerra y el conflicto cambian la división del trabajo por género dentro de la familia y las comunidades y la violencia

asociada a dicha transformación. Muchos de los ensayos también enmarcan las guerras y los conflictos armados contemporáneos como intrínsecamente relacionados con el control de las fuentes productivas (Ertürk, 2009), lo que a su vez reproduce y normaliza la violencia de género inherente a las relaciones económicas. Por lo tanto, el análisis de la economía política feminista de la guerra y el conflicto se justifica porque nos permite comprender cómo las relaciones económicas políticas producen y perpetúan la violencia continua a la que se enfrentan las mujeres antes, durante y después de la guerra. Los estudios de caso develan las relaciones de violencia en determinados lugares estratégicos, todos ellos con la guerra y el conflicto como telón de fondo, y aportan relatos ricos y contextualizados que describen las múltiples desigualdades que controlan la sexualidad y el estatus de las mujeres en la sociedad y afianzan su marginación política y económica. Los detallados relatos que ofrecen los estudios de caso no sólo enriquecen el conjunto de la literatura sobre género y conflicto, sino que también desafían, con pruebas empíricas, las nociones convencionales de que las mujeres son meras víctimas de la guerra. ■

■ Bibliografía

Be'Soer, L. (2012). 'Leveraging Women's Rural Leadership and Agency', Fifty-sixth Session of United Nations Commission on the Status of Women [\[online\]](#) 27 February – 9 March 2012 New York. [Consultado el 3 de diciembre de 2017].

Filer, C. (2016). 'The Intractable Problem of Landowner Identification in the PNG LNG Project: An Historical Perspective'. State, Society and Governance in Melanesia SSGM seminar, 12 September, Stable [\[online\]](#)[Consultado el 10 de enero de 2017].

International Committee of the Red Cross (2017). Spears to semi-automatics: The human cost of tribal conflict in Papua New Guinea. [\[online\]](#) [Consultado en diciembre de 2017].

International Committee of the Red Cross (2017). The old ways are gone: Papua New Guinea's tribal wars become more destructive. [\[online\]](#) [Consultado en diciembre de 2017].

Kopi, M. (2011). Violence and Insecurity in the South- ern Highlands of Papua New Guinea [\[online\]](#). [Consultado el 6 de septiembre de 2017].

Main, M. (2017). Papua New Guinea gets a dose of resource curse as ExxonMobil's natural gas project foments unrest. Australian Broadcasting Corporation [\[online\]](#). 10 de marzo de 2017. [Consultado el 5 de diciembre de 2017].

Médecins Sans Frontières (2011). Hidden and Neglected: The medical and emotional needs of survivors of family and sexual violence in PNG [\[online\]](#) [Consultado el 5 de septiembre de 2017].

Médecins Sans Frontières (2011). Hidden and Neglected: The Medical and Emotional Needs of Survivors of Family and Sexual Violence in PNG. Port Moresby: Médecins Sans Frontières (MSF), Stable [\[online\]](#).

Médecins Sans Frontières (2016). Return to Abuser: Gaps in Services and a failure to Protect Survivors of Family and Sexual violence in Papua New Guinea [\[on- line\]](#). [Consultado el 5 de septiembre de 2017].

Transparency International (2017). Perceptions of Corruption Index [\[online\]](#)

Violence against Women and Girls in Jiwaka Province, Papua New Guinea'. Voice for Change Community Survey Report, [\[online\]](#)(consultado el 5 de noviembre de 2017).

World Health Organisation (2015). Maternal mortality in PNG. [\[online\]](#)

■ Notas

1 -Reconocemos con gratitud la contribución realizada a los primeros borradores de este capítulo por Ambika Satkunanathan y Ayesha Imam. Ayesha Imam ayudó a coordinar las primeras fases de este proyecto y participó en el taller inicial en el que se debatió el marco de la investigación.

2- El establecimiento de la paz suele referirse a los procesos de paz y la construcción de la paz a la labor de paz posterior a los acuerdos. Para las definiciones de la ONU en el contexto del mantenimiento de la paz, véase <https://peacekeeping.un.org/en/terminology>. "El establecimiento de la paz generalmente incluye medidas para abordar los conflictos en curso y suele implicar acciones diplomáticas para llevar a las partes hostiles a un acuerdo negociado". Y "La consolidación de la paz tiene por objeto reducir el riesgo de que se produzca una recaída en el conflicto mediante el fortalecimiento de las capacidades nacionales a todos los niveles para la gestión de los conflictos, y sentar las bases de una paz y un desarrollo sostenibles. Es un proceso complejo y a largo plazo para crear las condiciones necesarias para una paz sostenible". Los estudios de caso presentados en este DI se refieren a ambos procesos.

Economía política del conflicto y la violencia contra las mujeres en Sri Lanka: La construcción de la mujer económicamente responsable

por Vagisha Gunasekara y Vijay K. Nagaraj

Este artículo intenta mapear las relaciones de violencia incorporadas en los acuerdos políticos y económicos que atraviesan los tiempos de guerra y los períodos anteriores y posteriores. Combinando un enfoque de economía política con conceptos de violencia estructural, los autores sostienen que la obsesión en las formas extremas de violencia de género en tiempos de guerra y conflicto armado, como la violencia sexual sistemática que tiene lugar en los medios fuertemente militarizados, a menudo pasa por alto las continuidades de la violencia en la vida económica cotidiana de las mujeres. El suyo es un llamamiento a dar un paso atrás, observar y comprender la violencia de género dentro de la economía política de la guerra y el conflicto, donde “la expropiación de recursos económicos e inmateriales vitales y el funcionamiento de sistemas de estratificación o categorización social que subvierten las posibilidades de supervivencia de las personas” (Anglin, 1998) continúan, aunque adoptando formas diferentes.

El documento enmarca la guerra y el conflicto como momentos de erupción en “un curso continuo de formación de clase, ideológica y política en el contexto de los procesos de acumulación” (Moore, 2015). Este marco se desvía de la comprensión dominante que retrata la violencia como un fenómeno producido únicamente por la guerra o el conflicto, borrando así las pistas de continuidad de la violencia estructural que

preceden a los límites temporales del tiempo de guerra. Los autores combinan este enfoque de la guerra con las ideas feministas críticas sobre la acumulación, al desestimar la idea de que la globalización del capital debe ser entendida como un momento de acumulación primitiva que tiene un importante componente de género. Inspirándose en la figura de Maria Mies (1987), los autores identifican a las mujeres, la naturaleza y la población de los países



Sri Lanka.

Fuente: Departamento de Encuestas de Sri Lanka (2015)

empobrecidos como lugares de extracción y desposesión. Por lo tanto, las divisiones sexuales, sociales e internacionales del trabajo suelen representar jerarquías tanto del trabajo como de los trabajadores atrapados en relaciones de violencia. De ahí que este documento vincule los conceptos de violencia estructural y acumulación por desposesión dentro de la economía política más amplia de la guerra y el conflicto. Los autores proponen un punto de vista que pone en el centro las relaciones político-económicas de género en lugar de la guerra y el conflicto en sí. Sostienen que esta “centralización” de las relaciones político-económicas nos permite situar la guerra y el conflicto en perspectiva, en lugar de concederles el estatus de sobredeterminación que tan a menudo tienen en contextos como el de Sri Lanka. Basado en el contexto de la posguerra de Sri Lanka, este documento sostiene esencialmente que la dinámica de acomodación y constitución mutua que implican al género y la violencia puede mapearse en términos de relaciones de violencia distintivas y de género, modos específicos de acumulación y desposesión, así como ciertos modos de poder y control. Esperamos que este enfoque o marco sea útil para comprender la naturaleza mutuamente constitutiva de la violencia de género y las relaciones económicas políticas en el contexto de la guerra y el conflicto.

Impugnación de la tesis del “crecimiento en medio de la guerra” en Sri Lanka

Los autores ponen en tela de juicio el tratamiento de la guerra y el conflicto como una desviación de lo “normal” que conlleva la asociación de la “recuperación tras el conflicto” con la consecución de “condiciones normales de la economía”. Este punto de vista, que defiende la “vuelta a la normalidad”, no da cuenta de la violencia que impregna los acuerdos económicos y políticos “normales”. Presenta la violencia como un fenómeno

producido únicamente por la guerra o el conflicto, borrando así las huellas de la continuidad de la violencia estructural que son anteriores a los límites temporales de los tiempos de guerra. Esta visión también ofrece una imagen distorsionada de las disposiciones espaciales de la violencia, ya que a menudo la limita a los espacios de combate. Esta representación de la guerra y el conflicto, que a menudo constituye la base de la “reconstrucción” posterior a la guerra y el conflicto, no tiene en cuenta cómo las condiciones de la guerra y el conflicto reproducen las relaciones espaciales, económicas y subjetivas de la violencia. Es esta visión de la guerra y el conflicto la que enmarca la trayectoria de Sri Lanka en términos del duro dualismo del “crecimiento en medio de la guerra”.

Inspirándose en Venugopal (2003), los autores afirman que el conflicto en el norte y el este de la isla “ha sido, de diferentes maneras, un factor que ha permitido el muy discutido proceso de reforma económica en el sur” (Venugopal, 2003). El desarrollo de las reformas económicas en Sri Lanka coincide con el advenimiento del marco neoliberal que integra la liberalización económica, la globalización, el libre comercio, la democratización y la gobernanza, encabezado por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)¹. Las dislocaciones sociales derivadas del proceso de liberalización se institucionalizaron en la guerra civil². Las geografías de la guerra se separaron físicamente de los lugares de producción.

Desde el punto de vista espacial, esto condujo a una separación geográfica entre el escenario principal de la guerra, en el norte y el este, y los principales teatros de producción, situados en el oeste, las colinas centrales y el sur del país³. En realidad, la guerra amortiguó algunos de los efectos negativos de las reformas, en parte porque el sector de la seguridad absorbió mano de obra⁴ debido

a la rápida expansión de las oportunidades de empleo⁵. Mientras tanto, la creciente etnización de la competencia económica a la sombra de un Estado autoritario y mayoritario no sólo fomentó el conflicto horizontal por motivos étnicos, sino que dejó al movimiento sindical prácticamente desarticulado.

Los autores sostienen que estas divisiones de diez representan jerarquías tanto del trabajo como de los trabajadores atrapados en relaciones de violencia. La más cruda de estas jerarquías en Sri Lanka está representada por los tamiles de las colinas, castas oprimidas traídas por los británicos desde el sur de la India a principios del siglo XIX para trabajar en sus plantaciones de café, que más tarde se trasladaron al té. El té ha sido durante mucho tiempo uno de los principales ingresos de las exportaciones de Sri Lanka y sigue representando más de la mitad de todas las exportaciones agrícolas en términos de ingresos⁶. Durante las décadas de guerra, el sector de las plantaciones siguió siendo una periferia interior que generaba valiosos ingresos en divisas que ayudaban a estabilizar la economía. Sin embargo, los tamiles de las colinas son los más desfavorecidos de los cuatro grupos étnicos principales de Sri Lanka. Las mujeres tamiles de las colinas, que constituyen prácticamente la totalidad de la mano de obra que recoge el té, se encuentran en la parte más baja de esta jerarquía y sufren la violencia patriarcal y étnica.

Las siguientes en la jerarquía son las trabajadoras domésticas. Recoger té y trabajar como empleadas domésticas en hogares de clase media y alta en los centros urbanos son, a menudo, las dos únicas opciones disponibles para las mujeres tamiles de las montañas de Sri Lanka. Los autores señalan las vidas de las trabajadoras domésticas para ilustrar la violencia inherente a la división del trabajo entre la esfera pública y la privada, apoyada por ideologías de género que consideran a las mujeres como las principales responsables del

trabajo no remunerado, y a menudo invisible, no pagado o mal remunerado en la esfera privada (Okin, 1989; Federici, 2004; True, 2010). Con la incorporación de cada vez más mujeres de las clases medias a la mano de obra formal en Sri Lanka, las mujeres tamiles de las colinas o las cingalesas de las zonas rurales pasaron a desempeñar el papel de ama de casa. Este “proceso de ama de casa”, como observó Mies (1998), ha conllevado la explotación y la violencia física, sexual y emocional ejercida sobre las mujeres tanto por los hombres como por las mujeres de la clase alta. El trabajo doméstico pone de manifiesto que la opresión y la dominación se producen y reproducen no sólo en las economías legales y formales, sino también en las informales e ilícitas.

“Las mujeres tamiles de las colinas, que constituyen prácticamente la totalidad de la mano de obra que recoge el té, se encuentran en la parte más baja de esta jerarquía y sufren la violencia patriarcal y étnica.”

A continuación, los autores se centran en las trabajadoras de las Zonas Francas y en las trabajadoras inmigrantes para explicar la transformación de la naturaleza del trabajo remunerado y la redefinición de las relaciones sociales a favor del capital, que han sido moldeadas por los procesos de globalización económica neoliberal. El giro neoliberal decisivo en la orientación de la política económica de Sri Lanka se produjo en 1977, acompañado de una represión masiva de los sindicatos y una escalada de los niveles de violencia contra la minoría tamil en particular. Las zonas francas del país, punto central de la industria textil y de la confección, con un 70% de mano de

obra femenina, son un legado de esta época. Las zonas francas se convirtieron en un elemento central para asegurar el lugar de Sri Lanka en la cadena de valor mundial de la confección, pero a costa de convertirse en un enclave privilegiado de capital exento de los regímenes fiscales y laborales normales. Esto sentó las bases para otro conjunto de enclaves en los que el contrato social se sustentaba en la coacción y la violencia, especialmente de las mujeres jóvenes, en su mayoría procedentes de las zonas rurales y periurbanas del interior, que entraron en las zonas francas en gran número. La emigración a gran escala de mujeres trabajadoras como empleadas domésticas al Oriente Medio, rico en petróleo, formó otro enclave laboral durante los años de la guerra.

Utilizando estos enclaves laborales de género, los autores sientan las bases para mapear la violencia de género durante y después de la guerra de Sri Lanka, de manera que se puedan ver las continuidades en las dimensiones de género más allá de la temporalidad de la guerra, y reconocerlas como vinculadas al patriarcado y a los impactos diferenciales de la globalización económica (True, 2010).

Acumulación de género por desposesión: El caso de las mujeres autónomas en Passikudah

Los autores formulan un marco de violencia de género en los acuerdos políticos y económicos que impregnan los tiempos de guerra y de paz examinando un “enclave” de género en el actual panorama político y económico de Sri Lanka: el trabajo por cuenta propia de las mujeres, que lleva el sello de los “medios de vida de posguerra”. Se basan en pruebas empíricas cualitativas recogidas de forma intermitente a lo largo de un período de tres años desde 2014 en Passikudah, una pequeña ciudad costera en el litoral oriental de Sri Lanka, para demostrar la naturaleza

mutuamente constitutiva de la violencia de género y los acuerdos y las estructuras políticas y económicas.

El trabajo por cuenta propia a través de medios de subsistencia basados en el hogar y el microemprendimiento es una parte importante de la visión política y económica de la posguerra, especialmente para las mujeres. Sin embargo, no es del todo nuevo; el Estado de Sri Lanka promovió activamente programas de trabajo autónomo en el período posterior a 1977 para mitigar los efectos de la estrategia de liberalización en las zonas rurales y como parte de un paquete más amplio de la Política de Ajuste Estructural (PAE) que pretendía crear oportunidades de empleo al tiempo que eliminaba la carga de la creación de empleo del Estado (Ruwanpura, 2000). Esta estrategia de desarrollo de la “base de la pirámide” amplió su alcance tras el tsunami del océano Índico de 2004 y en el período de posguerra determinado arbitrariamente después de 2009. Se rebautizó como “estrategia de desarrollo de posguerra”, una forma de salir de la pobreza para los afectados por la guerra y, en particular, para los hogares encabezados por mujeres en el norte y el este de Sri Lanka. Hoy en día, la industria de la microfinanciación es una empresa de miles de millones de rupias, y muchas instituciones registran más del 100% de beneficios.

Los autores observan que Passikudah se caracteriza por la imposición de una economía de complejo turístico intensiva en capital sobre un paisaje de producción primaria precaria en la pesca y la agricultura que ya está impregnado de desigualdades locales. La economía turística ha hecho atractivo el trabajo asalariado incluso, o precisamente, porque socava otras formas de producción primaria (por ejemplo, la pesca, la agricultura, el trabajo en las plantaciones de coco) como medio de vida seguro. Para las mujeres de Passikudah, trabajar en la industria del turismo conlleva ciertos

riesgos para su reputación, ya que los centros turísticos, los hoteles y las casas de huéspedes son vistos de forma negativa por la comunidad local. Son vistos como espacios que sirven para los vicios humanos, especialmente los de los “otros” varones, lo que genera narrativas de contagio étnico y cultural (Gunasekara, et al., 2016). En este contexto, los autores sostienen que el trabajo autónomo se ha convertido en el medio de vida de facto de las mujeres, y también de algunos hombres de Passikudah. Los autores señalan las relaciones de violencia de género que se dan en el trabajo autónomo de las mujeres en Passikudah, afectado por la guerra, centrándose en algunas historias de vida.

■ Preparados para el fracaso

El microcrédito y la microfinanciación son modalidades clave a través de las cuales se apoyan los planes de trabajo autónomo, que se presentan como un espacio económico inherentemente empoderador. Aunque los desembolsos son rápidos y eficientes, hay poca orientación útil sobre lo que se debe producir. Los futuros empresarios reciben formación sobre la fabricación de artículos que ya abundan en el mercado (como el jabón, las bolas de alcanfor o los palitos de incienso) o que tienen poco o ningún valor en el mercado.

Es típico que las mujeres autónomas pasen de producir un producto a otro en un plazo de seis meses. Cuando conocimos a “Rama”, fabricaba jabón en su casa; siete meses después, pasó a fabricar murukku (un aperitivo frito local) porque no podía vender ninguna de sus pastillas de jabón. Suelen encontrarse con la falta de demanda de los consumidores para sus productos, dado que la base de clientes es su propio barrio empobrecido. Varias emprendedoras nos contaron que aventurarse fuera de su pueblo conlleva riesgos, ya que los mercados son un terreno marcado por el género. Navegar y

negociar en los mercados implica enfrentarse a diversas formas de violencia de género y de control social. Por ejemplo, una vendedora de cacahuets dijo que muchos hombres se le insinúan cuando está en espacios públicos diariamente realizando ventas.

Las mujeres también tienen que negociar con sus maridos o parejas masculinas para llevar a cabo sus negocios fuera de casa. La misión diaria de ‘Valli’ es vender sus dulces caseros lo antes posible y volver a casa antes de que el marido regrese de su jornada laboral. A veces, cuando volvía tarde a casa, el castigo del marido llegaba en forma de golpes y patadas. Muchas otras mujeres relataron esta realidad. No es de extrañar que la mayoría de las empresas de trabajo autónomo fracasen, atrapando a las mujeres en círculos viciosos de endeudamiento que las hundan aún más en la pobreza.

Incluso en el puñado de casos relativamente exitosos, el trabajo autónomo ha funcionado principalmente para permitir la diversificación y distribuir el riesgo en lugar de permitir la acumulación de capital para facilitar una transición fuera de la precariedad (Gunasekara, et al., 2016). Estas realidades cuestionan algunos de los supuestos subyacentes del espíritu empresarial y la promesa de prosperidad frente al trabajo autónomo de las mujeres.

■ Refuerzo de los roles de género

En algunas ocasiones, los autores observaron a los agentes de crédito de microfinanzas en motocicletas durante sus visitas a las aldeas donde conceden los préstamos y cobran los reembolsos. Las reuniones relativas a los préstamos colectivos seguían un régimen estricto. Un grupo de unos diez o a veces quince clientes se reunía y se sentaba en círculo, alrededor del joven agente de crédito. En algunas ocasiones, la reunión comenzaba con un juramento de las mujeres

en el que se comprometían a utilizar el dinero para el bienestar de sus familias y a devolverlo a tiempo.

Los autores argumentan que este repertorio refuerza una construcción particular de la “mujer financieramente responsable” y de los roles de género: el hombre prestamista encarna la promesa de financiación para la mujer y su familia, junto con un arsenal de mecanismos tanto materiales como simbólicos para exigirle responsabilidades. A la mujer prestataria se la responsabiliza por crear una empresa viable de trabajo autónomo y garantizar y priorizar el bienestar de su familia en los roles prescritos de madre y esposa, intrínsecamente ligados a la carga reproductiva que se le impone, que también está incorporada en el juramento que hacen.

Cuando sus empresas de medios de subsistencia basados en el hogar fracasan y las mujeres no pueden devolver los préstamos, las consecuencias del endeudamiento son graves e incluso trágicas; las noticias de las zonas afectadas por la guerra que relacionan los suicidios con el endeudamiento se han convertido en algo habitual (Wijedasa, 2014; Guganeshan, 2017). Las mujeres que se retrasan en los pagos a menudo se enfrentan a la intimidación y el acoso de los cobradores de préstamos que suelen practicar el marketing y el cobro de préstamos puerta a puerta (Gunasekara, et al., 2016; Gunasekara, et al., 2015). Además de las dimensiones física y psicológica, este tipo de violencia también tiene una dimensión subjetiva menos explorada: las mujeres se enfrentan a riesgos de reputación porque la intimidación y el acoso tienen lugar en su propia puerta, en la comunidad en la que viven. Este tipo de violencia alcanzó niveles tan crónicos en la provincia oriental que, en 2014, el secretario del distrito de Batticaloa prohibió las visitas semanales a los domicilios para cobrar las cuotas de los préstamos.

Conclusión: Modos de poder y control que reproducen las relaciones de violencia

Este estudio de caso devela las relaciones de violencia de género (espacial, económica, subjetiva y sexual) en relación con un modo de acumulación y desposesión, el trabajo autónomo, en un intento de ilustrar ciertas fuerzas económicas, políticas e ideológicas más amplias que están enredadas en esta compleja red y que reproducen continuamente la violencia. Los autores se refieren a estas fuerzas como “modos de control”. El contexto en el que existen actualmente estos modos de control es lo que conocemos como “globalización neoliberal”.

La reestructuración capitalista de los últimos cuatro decenios ha obligado a las mujeres a trasladarse del hogar al espacio público y a trabajar cada vez más horas para mantener el hogar. Mediante el modo de control que los autores denominan “responsabilización”, el trabajo de la mujer en la esfera pública sigue llevando el sello del trabajo infravalorado, informal y no remunerado que realizaba en la esfera privada. La mujer “responsable”, motor ideológico del microcrédito, trabaja en un contexto no regulado y sin leyes laborales, y al igual que el trabajo doméstico dentro del hogar, no tiene fin y se realiza las 24 horas del día.

El principal argumento de los autores es que en las economías de trabajo autónomo examinadas en este trabajo subyacen regímenes de orden y seguridad sexual que se mantuvieron y se mantienen mediante la coacción y la violencia. Pero considerar la coerción y la violencia de forma aislada, por ejemplo como actos discretos de violencia sexual o violencia contra las mujeres y las niñas, como hace la mayoría de las veces la agenda de la justicia transicional, no consigue, en primer lugar, abordar las condiciones estructurales que producen dicha violencia. En segundo

lugar, este enfoque acaba basándose casi exclusivamente en la individualización de la responsabilidad y el victimismo, y corre el riesgo de fragmentar la posibilidad de las luchas políticas colectivas para resistir y transformar dichas condiciones. En el período de posguerra, las mujeres del Norte y del Este, que son los objetivos preferidos de los préstamos de microfinanciación y de otros planes de trabajo autónomo impulsados por la deuda, se ven obligadas a entrar en un espacio socioeconómico en el que las ideas profundamente sexistas de que las mujeres son prestatarias más fiables, responsables y cumplidoras las han atado al empleo doméstico, dejándolas vulnerables a múltiples capas de violencia estructural. ■

■ Bibliografía

- Acosta H., Cindy Lorena (2015). "Violencia Basada en el Género y Guerra: Mujeres, Violencia Sexual, Desplazamiento Forzado y Restitución de Tierras en el Departamento del Magdalena 1999 a 2012." *Criterios - Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional*, 8, no. 2. Bogotá: Universidad de Buenaventura.
- Banco de la República (2016). *Indicadores Económicos*. Bogotá: Banco de la República. [\[online\]](#)
- Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). *Basta Ya! 1-434* Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
- Colombia Reports (2015a). "Understanding Colombian Conflict: Inequality." In *Peace Process*, Online: Colombia Reports. [\[online\]](#)
- (2015b). "Who Commits Most Sex Crimes in Colombia's Conflict." By Guggenheim, Julia, & Alice Bradshaw-Smith, Online: Colombia Reports. [\[online\]](#)
- Colombian Congress (1988). Law 30, 1988 - Otor-ga Facultades al Presidente de la República. 38.264, *Diario Oficial No. Law 30*. Bogotá: Gobierno de la República.
- (2002). Ley 731 de 2002 - Normas para Favore- cer a las Mujeres Rurales. Law 731. Bogotá: Gobierno de la República.
- Crandall, Russell (1999). "The End of Civil Conflict in Colombia: The Military, Paramilitaries, and a New Role for the United States." *SAIS Review* 19, no. 1. Amherst: University of Massachusetts.
- Cueter, Nicolas (2015). "Caught between the War on Drugs and Guerrilla Warfare: Colombia's Road to Peace." Master of Arts in Liberal Studies (MALS). Washington, DC: Georgetown University.
- Defensoría del Pueblo (2014). *El Conflicto Armado y el Riesgo para la Mujer Rural*. Sistema de Alertas Tempranas Bogotá: Torre Gráfica.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015). *Tercer Censo Nacional Agropecuario*. Online: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2017a). *Exportaciones - Junio 2017*. Boletín Técnico. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2017b). *Presentación Resultados de Pobreza 2016*. Presentación. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- Departamento Nacional de Planeación (2015a). *Sal- dar la Deuda Histórica con el Campo*. Marco Conceptual. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2015b). *El Campo Colombiano: Un Camino Hacia el Bienestar y la Paz*. Misión para la Transformación del Campo TOMO 3. Bogotá: Gobierno de la República.
- Ejército Nacional de Colombia (2015). *Mujer Militar; Igualdad y Liderazgo*. Online: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- Enloe, Cynthia (2004). "The Politics of Masculinity and Femininity in Nationalist Wars." In *The Curious Feminist: Searching for Women in the New Age of Empire*, Ch. 7. Berkeley: University of California Press.
- Gates, Scott, Håvard Hegre, Håvard Møkleiv Nygård, & Håvard Strand (2012). "Development Consequences of Armed Conflict." *World Development* 40, no. 9. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
- Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda, & Eduardo Umaña Luna (1962). *La Violencia en Colombia: Estudio de un Proceso Social*. I of II. 1-458 Bogotá: Editorial Tercer Mundo.
- Herrera, Natalia, & Douglas Porch (2008). "'Like Going to a Fiesta' - the Role of Female Fighters in Colombia's FARC-Ep." *Small Wars & Insurgencies* 19, no. 4. Online: Taylor & Francis Online. [\[online\]](#)
- Ibáñez, Ana María, Margarita Gáfaró, & Valentina Calderón (2011). "Forced Displacement, Female Labor Participation and Household Bargaining Power: Does Conflict Empower Women?" *Documentos CEDE*, no. 45. Bogotá: Universidad de los Andes.
- National Institute of Legal Medicine and Forensic Sciences (2015). *Violencia Sexual en Colombia*. Forensis. Bogotá: Government of the Republic.

López M., Cecilia (2011). "Design and Formulation of Policies for Displaced Women." On El Reto Ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado: Superar la Exclusión Social de la Población Desplazada. First Ed., Ch. 11. Bogotá: CODHES.

Mantilla V., Silvia (2012). "Economía y Conflicto Armado en Colombia." Latin America 55, no. 2. Mexico: National University of Colombia. [\[online\]](#)

Otero B., Silvia (2006). Colombia: Women in War and Peace. Lo Femenino de las FARC y de las AUC. Online: ReliefWeb. [\[online\]](#)

Registro Único de Víctimas (2017). National Information Network. Online: Government of the Republic. [\[online\]](#)

Stewart, Frances (2010). "Women in Conflict and Post-Conflict Situations." Development Cooperation Forum. New York: UN Economic and Social Council.

Vergel, Carolina (2012). "Entre Lutte Armée Et Féminisme: Quelques Reflexions À Propos Des Femmes Combattantes en Colombie." Revista Derecho del Estado, no. 29. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.

Wills, María Emma (2005). "Mujeres en Armas: Citizen Advancement or Feminine Subjugation?" Análisis Político, no. 54. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [\[online\]](#)

■ Notas

1- La industria mundial del desarrollo hizo de la liberalización económica una condición clave de los préstamos concesionales en el marco de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) ofrecidos para salvar las economías en declive del Sur Global. La suscripción de Sri Lanka a los PAE durante este periodo provocó un cambio en la política exterior hacia el bloque estadounidense, lo que a su vez dio lugar a una oleada sin precedentes de proyectos de inversión en el sector público patrocinados por la ayuda extranjera. En contra de la expectativa de que el grado de malestar y conflicto disminuyera como resultado de la reducción de la intervención estatal y el consiguiente aumento de las oportunidades económicas y de empleo, se produjo una intensificación del conflicto político durante este periodo de transición que finalmente culminó en una guerra civil en 1983.

2- Tras dos décadas de una economía impulsada por las políticas de sustitución de importaciones, Sri Lanka entró en un periodo de transición económica y política en el periodo 1977-83 con la elección del gobierno liderado por el Partido Nacional Unido (UNP). Dirigido por el Sr. J.R. Jayawardena, el gobierno puso fin a la sustitución de importaciones e instituyó un amplio programa de liberalización del comercio, desregulación del sector privado y supresión de muchas

disposiciones de bienestar social que históricamente fueron empleadas por la élite gobernante para comprar y mantener la paz social (Dunham y Jayasuriya 2000). Aunque se caracterizó por una importante ruptura de la filosofía y los acuerdos económicos, este periodo de transición no sólo heredó, sino que también reprodujo muchos de los legados políticos y económicos de los años cincuenta y sesenta. La transición de una economía basada en la exportación de plantaciones a una economía de sustitución de importaciones basada en el sector público a mediados de la década de 1950 coincidió con el enfrentamiento entre cingaleses y tamiles por el desarrollo desigual y el poder político (Venugopal 2003). Las dos décadas de regulación gubernamental (1956-76) de las empresas del sector privado, la banca y el comercio exterior, y la nacionalización de industrias clave como las finanzas, los puertos y el petróleo, condujeron a una dependencia del patrocinio estatal para acceder a las escasas oportunidades de empleo y a los contratos y permisos del sector privado, y determinaron la ubicación de las industrias del sector público, el riego en la zona seca y los proyectos de reasentamiento (Gunasinghe 1984).

3- Las zonas francas y las plantaciones de té, ambas dependientes de la mano de obra femenina, y la mayoría de los destinos turísticos situados principalmente en el oeste y el sur, estaban bien aislados de los efectos directos de la guerra.

4 -El gobierno del UNP tuvo dificultades para mantener el ritmo inicial de la liberalización. A medida que el crecimiento económico se ralentizaba, el Estado se convirtió en el "empleador de último recurso" y la expansión del sector de la seguridad empujó a los jóvenes cingaleses de las comunidades rurales campesinas y pesqueras a alistarse en el ejército (Venugopal 2003, 32). La creciente militarización del Estado en tiempos de guerra alimentó los poderes autoritarios del Estado para sofocar cualquier disturbio político grave (ibíd.). Estas condiciones y la falta de transparencia en muchas transacciones crearon vías para la extracción de rentas a gran escala en la economía de guerra (Athukorala y Jayasuriya 2012, 11). Como resultado, muchas medidas de privatización se ejecutaron de forma que favorecieron a las empresas con vínculos con el Estado y a los funcionarios gubernamentales que se dedicaban a las prácticas corruptas (es decir, a las comisiones).

5- Que en 2001 representaban más del 5% del empleo total y un porcentaje mucho mayor del empleo en el sector formal para los hombres cingaleses (Venugopal 2003, 32).

6- http://www.cbsl.gov.lk/pics_n_docs/latest_news/press_20150507ea.pdf

Acabar con los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres en la región de las tierras altas de Papúa Nueva Guinea: El Estado, las industrias extractivas y la sociedad civil

por Elizabeth Cox¹



Defensoras de los derechos humanos de Hela, Jiwaka y Simbu, reunidas por el Fondo de Acción Urgente del Pacífico a finales de 2018. Foto de Elizabeth Cox.

Papúa Nueva Guinea (PNG) cuenta con un Distrito Capital Nacional, veintidós provincias, en su mayoría rurales, y una región autónoma (Bougainville) en situación de posconflicto. Las tres provincias más remotas de las Highlands albergan vastos proyectos relacionados con el oro, el petróleo y el gas, están fuertemente militarizadas, son lugares de conflicto armado y siguen siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para ser mujer. Los avances nacionales para acabar con la violencia contra las mujeres incluyen nuevas leyes, ganadas con mucho esfuerzo,

resultado de cuatro décadas de defensa y activismo liderado por la sociedad civil. Sin embargo, el Estado aún no ha demostrado voluntad política ni ha proporcionado presupuestos suficientes para aplicar con éxito las leyes y la estrategia sobre la violencia contra las mujeres, y los principales actores y proyectos estatales sobre la violencia contra las mujeres siguen dependiendo de la ayuda.

Desde la independencia de Papúa Nueva Guinea (1975), una sucesión de gobiernos dominados por los hombres ha forjado una

economía dependiente de la extracción que va en contra de los objetivos nacionales constitucionales y de los principios rectores que dan prioridad al desarrollo equitativo, sostenible e inclusivo. Los ingresos de varias “décadas de bonanza” impulsadas por las industrias extractivas se han dilapidado y la mayoría de los ciudadanos viven sin carreteras, electricidad ni suministro de agua potable. Los índices de mortalidad materna, corrupción y delitos de violencia contra las mujeres se encuentran entre los más altos del mundo (OMS 2015, Transparencia Internacional 2017). La gobernanza política y fiscal ha empeorado y la prestación de servicios básicos ha disminuido a medida que aumentaba la dependencia de las actividades extractivas. El Estado depende de la ayuda australiana y de los controvertidos planes de crédito fiscal de la industria extractiva para camuflar el deterioro de los sistemas de salud, educación y justicia.

Jiwaka y Hela son las dos provincias más recientes de Papúa Nueva Guinea. Creadas en 2012, se unen a otras cinco provincias de la populosa región interior de Highlands, donde vive el cuarenta por ciento de la población total de Papúa Nueva Guinea, que supera los ocho millones de habitantes. Hela y Jiwaka comparten un legado de culturas patriarcales violentas, conflictos tribales y control coercitivo de las mujeres. Ambas provincias tienen el reto de desarrollar las infraestructuras, la administración pública y la sociedad civil necesarias para un futuro desarrollo social y económico viable.

Hela cuenta con una gran riqueza de recursos naturales y proyectos de industrias extractivas a gran escala en expansión (petróleo, oro y gas que se han explotado durante muchas décadas). Pero sus indicadores de desarrollo humano son pobres, la sociedad civil es prácticamente inexistente y los servicios básicos apenas funcionan.

Jiwaka tiene una fuerte economía agrícola en la que la producción, la distribución y el comercio de alimentos por parte de las mujeres son fundamentales. También alberga una fuerte ONG local dirigida por mujeres, que desde hace más de una década defiende un futuro libre de violencia, ha creado redes de defensoras de los derechos humanos y una sólida base para un amplio movimiento ciudadano por la paz.

Las tres provincias más remotas de las siete Highlands de Papúa Nueva Guinea, entre las que se encuentra Hela, tienen el fuerte impacto de proyectos de oro, petróleo o gas a gran escala. Las operaciones Fly In/ Fly Out (FIFO) cuentan con un personal con gran movilidad, predominantemente masculino, compuesto por expatriados y nacionales. Los enclaves de alta seguridad de la IE están rodeados de comunidades desplazadas e impacientes de terratenientes y de asentamientos improvisados de migrantes interprovinciales de la industria extractiva que se ganan la vida con el comercio informal, la minería aluvial y el trabajo sexual. Los contratistas globales proporcionan fuertes medidas de seguridad para las plantas y el personal de las industrias extractivas, y las empresas extractivas subvencionan en gran medida las operaciones de la policía local. Con frecuencia se declaran estados de emergencia, lo que implica el despliegue cada vez más frecuente de unidades militares y policiales especiales para evitar la interrupción de las operaciones de las industrias extractivas, que funcionan las 24 horas del día.

Las mujeres de las comunidades afectadas por las industrias extractivas de Papúa Nueva Guinea han alzado la voz con frecuencia contra su exclusión y su experiencia continua de viejas y nuevas formas de violencia. El Banco Mundial y las empresas de la industria extractiva han respondido con sucesivas repeticiones de programas de “Mujeres en la minería” que afirman apoyar

el empoderamiento político y económico de las mujeres, pero que esencialmente ofrecen poco más que una formación anticuada e inapropiada para la domesticación y la pequeña empresa de las mujeres locales. No fortalecen la intervención de las mujeres para que defiendan eficazmente sus prioridades, necesidades y preocupaciones, incluidas las formas en que los proyectos de IE exacerban su experiencia de conflicto y violencia en los ámbitos público y privado.

El patriarcado y la guerra: Persistentes y resurgentes

La exploración colonial del interior de las Highlands (década de 1930) dio cuenta de sociedades grandes, patriarcales y agrícolas con economías y culturas complejas construidas sobre ciclos de guerra, paz, compensación e intercambio. La administración colonial australiana de la región de las Highlands comenzó a finales de la década de 1940, entre cinco y siete décadas después de la colonización de las regiones costeras e insulares. Se impuso la paz y se fomentó una industria cafetera minifundista que, en última instancia, fue consolidada y controlada por los nuevos “grandes” capitalistas de las Highlands.

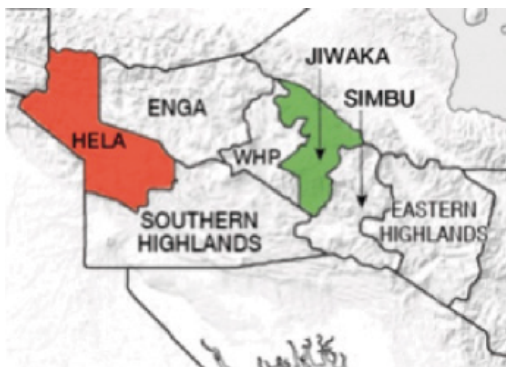
La política posterior a la independencia y la economía basada en la extracción suscitaron nuevas y poderosas aspiraciones y expectativas, y contribuyeron al resurgimiento de nuevos conflictos tribales y de clanes, cada vez más armados y mortíferos, en los que los factores desencadenantes, las armas, los intereses y las reglas de enfrentamiento han cambiado drásticamente.

Los estudios antropológicos realizados en las Highlands informan de los altos niveles de control masculino coercitivo y violento sobre la fertilidad y el trabajo productivo de las mujeres. Los padres y hermanos arreglaban los matrimonios tempranos de

las púberes con los hombres que ofrecían el precio más alto por la novia y las alianzas económicas (tierra) y políticas (guerra) más estratégicas. Las mujeres y las niñas que desafiaban, resistían y no se conformaban con esta situación eran sometidas a castigos físicos extremos, estigmatizadas y desterradas de la familia y la comunidad. El suicidio de mujeres o niñas no era infrecuente. En la actualidad, el patriarcado, los conflictos violentos, los matrimonios en la infancia y la poligamia siguen siendo normas poderosas en las Highlands luego de la independencia. Los proyectos de recursos proporcionan el dinero que alimenta la inflación del precio de la novia y la compra de armas que intimidan a los padres reacios o a las novias que se resisten. Las niñas que se resisten pueden recurrir al trabajo sexual a lo largo de la autopista de las Highlands, satisfaciendo la demanda de los conductores de camiones, terratenientes y trabajadores, personal de seguridad y policía que obtienen ingresos directa o indirectamente de las industrias extractoras.

El patriarcado no está codificado en el derecho y se opone a las disposiciones constitucionales fundamentales sobre la igualdad de derechos y la participación, pero sigue siendo la norma más poderosa en el funcionamiento de las instituciones políticas y económicas contemporáneas. La mayor parte de la tierra en Papúa Nueva Guinea (97%) sigue siendo de propiedad consuetudinaria. Los mecanismos y procesos estatales que se ocupan de las industrias extractivas consideran a los hombres (únicamente) como propietarios consuetudinarios de la tierra, lo que justifica la exclusión de las mujeres de la recepción directa de los beneficios de las regalías y la equidad. La mayoría de los conflictos son por la tierra y se resuelven de forma tradicional, mientras que los delitos civiles y penales menores se juzgan en los tribunales de las aldeas basados en la costumbre. Los conflictos tribales

contemporáneos combinan cuestiones tribales, económicas y políticas antiguas y emergentes, y las alianzas están cada vez más dirigidas por jóvenes e implican armas de alto poder de contrabando, “sicarios” locales (tiradores mercenarios) y francotiradores. Son sintomáticos de la alienación social, la manipulación política y la traición económica de poblaciones remotas, rurales y abandonadas a las que se ha convencido de que ceder sus tierras a la explotación de los recursos minerales y petrolíferos se traducirá en una riqueza y prosperidad locales transformadoras. Los clanes y las tribus que compiten por las migajas que puedan caer de alimentar a las corporaciones extractivas, entran fácilmente en conflicto entre sí. Las mujeres son cada vez más atacadas y ejecutadas de formas que no estaban permitidas en las normas tradicionales de enfrentamiento (Arigo, 2017).



Las siete provincias de la Región de Highlands de Papúa Nueva Guinea

Los conflictos tribales desplazan internamente a un gran número de personas que se ven obligadas a refugiarse en tribus vecinas que las acogen. Vivir de la tierra y de los recursos de otros conlleva deudas “tradicionales” que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres y las niñas desplazadas internas ante los depredadores sexuales oportunistas y los delitos de violencia sexual que se cometen con impunidad. Los hombres desplazados, impotentes y humillados se desesperan por conseguir dinero, comprar armas y llevar a cabo ataques de venganza para reclamar sus

tierras y mujeres. Surgen los señores de la guerra, obligan a todos los hombres a luchar, imponen gravámenes locales para comprar armas y obligan a las mujeres y a las niñas a utilizar los pequeños ingresos que tanto les ha costado conseguir para dedicarse al arriesgado comercio ilegal de municiones (Be’Soer, 2012).

Las mujeres de jiwaka lideran un movimiento por la igualdad de género, el desarrollo y la paz

La provincia de Jiwaka se creó para dar al pueblo whagi, abandonado desde la independencia, una mayor representación política y una mejor prestación de servicios. Jiwaka no cuenta con industrias extractivas, pero tiene una fuerte sociedad civil dirigida por mujeres y una generación joven orgullosa, educada y entusiasta, que supervisa la gobernanza provincial a través de las redes sociales.

Jiwaka tiene una economía agrícola, una industria cafetera en declive y se extiende a ambos lados de la autopista de Highlands. La producción y el comercio de alimentos de Jiwaka, dirigidos por mujeres, se consideran informales, insignificantes y rara vez se “cuentan”, aunque son la columna vertebral de la economía local de Jiwaka, ya que garantizan el sustento de las familias y fomentan el comercio interprovincial a lo largo de la Carretera de Highlands (Be’Soer 2012).

Desde la década de 1980, los proyectos de industria extractiva a gran escala en las provincias vecinas han tenido un impacto indirecto en Jiwaka a través del empleo de sus hombres. Demasiados son maridos y padres ausentes, que regresan con un permiso mensual para emborracharse y relacionarse con sus parientes varones. Los terratenientes y los empleados de los yacimientos de oro, petróleo y gas de las provincias vecinas visitan Jiwaka con regularidad en busca de

nuevas novias, a menudo menores de edad, ofreciéndoles un precio de novia inflado y regalos en lo que se parece más a la trata moderna que a la tradición (Voice for Change, 2015).

La principal ONG local de Jiwaka, Voice for Change (VFC), es una organización de derechos de la mujer creada en 2003 para atender a las agricultoras. Los primeros programas permitieron a las mujeres gestionar y controlar sus ingresos. Muchas integrantes compartían experiencias de violencia física y psicológica sistémica por parte del cónyuge, incluida la negligencia resultante de la poligamia y el ausentismo. Muchas también habían sufrido largos años de desplazamiento interno como consecuencia de los continuos conflictos tribales y habían soportado acoso, violaciones y matrimonios forzados mientras vivían en las tierras y con recursos de otras tribus. Durante mucho tiempo, sus integrantes han luchado por controlar sus ingresos, ya que los maridos y los parientes varones suelen requisar su dinero en efectivo para comprar armas y municiones para ataques de venganza o para financiar ceremonias de paz dirigidas por hombres, pagos extravagantes por el precio de la novia y campañas políticas. Conseguir el divorcio en los tribunales de las aldeas conlleva el pago del precio de la novia a los parientes de los maridos.

En 2008, las líderes de VFC estaban adquiriendo nuevos conocimientos sobre el impacto del conflicto tribal de Highlands en las mujeres y la economía local, y elaboraron estrategias para acabar con la violencia y la discriminación (Be'Soer, 2012).

Cuando se declaró la nueva provincia de Jiwaka, VFC ya estaba analizando el impacto de género del conflicto, los arsenales de armas de alto poder, la alienación y la ira de los jóvenes varones y los hombres que se desplazan hacia y desde los enclaves vecinos de la industria extractiva. Al entender que

estas son las causas básicas de la violencia contra las mujeres, se vieron impulsadas a trabajar para acabar con la impunidad, controlar sus propios ingresos y acceder a la justicia. VFC ha creado servicios de respuesta rural en toda la provincia para frenar la violencia contra las mujeres. Cada vez más, las mujeres participan en la intervención temprana para evitar que las disputas menores se conviertan en luchas tribales armadas a gran escala; abogan por limitar el precio de la novia y garantizar pagos de compensación consuetudinarios justos y realistas, de modo que la paz y la normalidad puedan restablecerse rápidamente.

El triple trauma de las mujeres de hela: La expansión de la industria extractiva, el conflicto armado sin control y la violencia extrema contra las mujeres

La provincia de Hela es el hogar de varios grupos étnicos que comparten ancestros y mitología. Es una zona remota y subdesarrollada, con escasos vínculos administrativos o de la sociedad civil con el resto del país. Se constituyó como provincia en 2012 para responder a la cosmovisión indígena específica de los líderes locales y a sus aspiraciones de unidad e identidad. El patriarcado, el conflicto armado y la violencia contra la mujer en Hela están bien documentados (MSF 2011, 2016) y la sociedad civil es mínima y está en decadencia. La provincia de Hela es rica en recursos, pero se encuentra entre las más pobres en cuanto a desarrollo social y económico. Muchos de sus habitantes (antiguos habitantes de Southern Highlands) llevan décadas sufriendo el impacto de proyectos de petróleo y gas a gran escala que proporcionan importantes ingresos al Estado y alimentan la mayor mina de oro de Papúa Nueva Guinea en la vecina provincia de Enga. Las numerosas plantas

de alta tecnología y alta seguridad de las industrias extractivas en las zonas remotas de Hela requieren frecuentes despliegues de fuerzas especiales policiales y militares para sofocar las protestas de los terratenientes y las “luchas tribales” que amenazan las operaciones de petróleo y gas, que funcionan las 24 horas del día.

La transición política de Hela hacia una nueva provincia coincidió con las negociaciones para poner en marcha el proyecto de gas licuado de Papúa Nueva Guinea (PNG LNG) en tierras consuetudinarias de Hela. Los socios de la empresa conjunta, EXXON Mobil, Oil Search y Santos, prometieron enormes beneficios económicos al Estado, a la provincia y a los propietarios locales. El Estado, a su vez, prometió una transformación económica que beneficiaría a todos los ciudadanos de Papúa Nueva Guinea.

La fase de construcción del proyecto de gas de 19.000 millones de dólares importó una gran cantidad de mano de obra cualificada extranjera (80%) y estableció, en un tiempo récord, una enorme planta de procesamiento de gas y 700 km de tuberías terrestres y submarinas. Los empleados nacionales (20%) desempeñaron sobre todo funciones no cualificadas y de seguridad a corto plazo. Los salarios de los trabajadores, las compensaciones por el uso de la tierra y la reubicación se pagaron puntualmente durante la construcción y aumentaron considerablemente las existencias de armas de alto poder de contrabando de los hombres locales.

Las exportaciones de gas comenzaron antes de lo previsto, a mediados de 2014. Sin embargo, los procesos de diligencia debida para la identificación precisa de los propietarios de las tierras, la obtención de su consentimiento libre, previo e informado, la facilitación de los Grupos Constituidos de Terratenientes (ILG) obligatorios y la

negociación inclusiva de los acuerdos de reparto de beneficios dirigidos a nivel local se aceleraron y se han visto seriamente comprometidos. En todo momento, las mujeres fueron ignoradas como partes interesadas, participantes y beneficiarias. A principios de 2018, Exxon anunció sus planes de casi duplicar la capacidad de exportación de la instalación a 16 millones de toneladas al año. Sin embargo, el Estado sigue sin poder decidir quién debe recibir las regalías y las acciones y qué forma de distribución de beneficios en efectivo evitará una mayor escalada del conflicto armado (Filer, 2016; Main, 2017). Los derechos pendientes de pago que se deben a los propietarios de tierras de Hela por proyectos de recursos pasados y nuevos han alcanzado, según se informa, miles de millones. La ira y las protestas van en aumento. La policía y el ejército se despliegan continuamente para proteger las plantas de petróleo y gas, y los jóvenes enfurecidos y fuertemente armados se vuelven contra su propia gente, aterrizando a los civiles, bajo la apariencia de un conflicto tribal (Arigo, 2017).

Los operadores de petróleo y gas han recurrido a planes de crédito fiscal para construir nuevas infraestructuras en Tari, el centro administrativo de Hela, pero el capital humano y una economía local dinámica no se han materializado. Las barracas de los trabajadores han sido saqueadas, los nuevos centros de recursos para mujeres han sido quemados en protestas de los terratenientes y la proliferación de armas ha creado un estado de anarquía e ilegalidad.

La violencia de los hombres contra las mujeres en la “nueva” y más remota provincia de Hela es una de las peores de Papúa Nueva Guinea, comparable a las peores regiones del mundo afectadas por conflictos. La ciudad de Tari y la provincia de Hela se consideran demasiado violentas para que las ONG internacionales o los voluntarios

residan y operen en ellas (MSF 2011, 2016, Arigo 2018). Con intereses estatales centrados exclusivamente en las industrias extractivas y sin una sociedad civil local que informe, eduque y proteja los derechos de la población, Hela es un infierno para las mujeres.

OXFAM denunció la anarquía y la impunidad de Hela ante los mortíferos conflictos armados entre los hombres, las formas extremas de violencia contra las mujeres y la inevitabilidad de un aumento de la VCM con la llegada de los grandes proyectos de gas. Los datos hospitalarios confirmaron que los traumatismos físicos eran la causa más común de hospitalización y muerte. Las lesiones de los hombres se debían a conflictos tribales, mientras que las de las mujeres se debían a que sus maridos, padres, hermanos y coesposas les infligían daños corporales graves. El sistema de tribunales de las aldeas estaba desbordado y era deficiente, los servicios de los tribunales de distrito estaban ausentes, los recursos humanos y financieros de la policía eran inadecuados y la prisión estaba descuidada y no funcionaba.

Los jueces, los ministros del Estado y los representantes de los donantes que visitaban la ciudad de Tari necesitaban servicios de seguridad estatales armados. (Kopi, 2011). En los últimos años, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado y respondido a la escalada de combates tribales, sobre todo en misiones humanitarias posteriores al conflicto. El CICR considera que los conflictos tribales que resurgen son guerras a pequeña escala, en las que los combatientes armados atacan cada vez más a los civiles no combatientes, las mujeres y los niños (CICR descrito, 2017).

Hay pocas ONG locales activas en Hela. Las becas de EXXON para la formación internacional de Mujeres en Gestión y las pequeñas subvenciones de Oilsearch a mujeres líderes locales y a su propio personal no han estimulado la formación

de organizaciones locales de derechos de la mujer. La organización Young Ambassadors for Peace (YAP), creada para la provincia de Southern Highlands en 2003, está asociada a una iglesia local, ha trabajado con OXFAM y ahora con el CICR.

Las mujeres y las niñas de Hela se enfrentan a diario a múltiples niveles y capas de traumas derivados de las nuevas formas de conflicto armado mortífero; una violencia de género extrema y hasta mortal. Están demasiado preocupadas por su seguridad personal como para protestar por su exclusión política y económica de la planificación de proyectos locales de la industria extractiva y el reparto de beneficios.

Su situación empeoró en febrero de 2018, cuando un potente terremoto de 7,5 grados sacudió las Highlands de Papúa Nueva Guinea. Las principales plantas de gas de Exxon se encontraban en el epicentro de los terremotos, que provocaron desprendimientos de tierra que sepultaron pueblos y destruyeron infraestructuras. Cientos de personas murieron y resultaron heridas, y miles quedaron traumatizadas y desplazadas. Las mujeres que fueron trasladadas a rudimentarios refugios seguros se vieron de repente más expuestas a las bandas o a los jóvenes armados. Las operaciones de la planta de gas se restablecieron en menos de un mes, pero durante la mayor parte de 2018, los consultores en derecho y justicia financiados por fondos de ayuda y las ONG internacionales suspendieron sus actividades de entrada y salida. Y la unidad de respuesta a la violencia contra la mujer de la policía financiada por fondos de ayuda se ha visto muy retrasada (Arigo, 2017).

■ Conclusión

Este ensayo examina el papel del Estado, las industrias extractivas y la sociedad civil en

la confrontación del patriarcado y el fin de los conflictos violentos y la alta incidencia y gravedad de la violencia contra las mujeres y las niñas que caracteriza a la región de las Highlands de Papúa Nueva Guinea. Se centra en las dos “nuevas” provincias de las Highlands de Papúa Nueva Guinea. El caso de Jiwaka muestra cómo la sociedad civil dirigida por mujeres puede influir en el desarrollo social y económico, informando, educando y movilizándolo la demanda de los ciudadanos y las ciudadanas por la paz y el fin de la violencia contra las mujeres. La provincia de Hela también está “en formación”, pero está ocupada y perturbada por la violencia y la inestabilidad que rodea a las remotas plantas de petróleo y gas ya establecidas, así como por las promesas no cumplidas del último y mayor proyecto de la industria extractiva de Papúa Nueva Guinea. El dramático empeoramiento del conflicto y de los delitos de violencia contra las mujeres en la provincia de Hela, agravado por la proliferación de armas de alto poder y las recientes catástrofes naturales, tiene lugar de forma paralela, pero sin afectar la extracción, el procesamiento y la exportación de gas, altamente rentable y en expansión. Visualizar una de las provincias de las Highlands como Hela sin guerra ni violencia parece imposible en el contexto de las industrias extractivas, donde el Estado ha abandonado su deber de servir a los ciudadanos, y donde las frágiles ONG locales, sin apoyo financiero ni moral, no pueden operar eficazmente.

El desarrollo y el cambio en la vecina y nueva provincia de Jiwaka contrastan fuertemente. Libres de las promesas políticas, las presiones y la disputa de los ingresos monetarios prometidos por parte de los hombres, las mujeres de Jiwaka han tenido el espacio necesario para organizarse, debatir y reflexionar sobre las divisiones tradicionales del trabajo y las relaciones de poder basadas en el género, así como sobre las consecuencias específicas del conflicto. Su creciente movimiento a favor de la igualdad,

el desarrollo y la paz es de cosecha propia y tiene fundamento. Las armas no han desaparecido en Jiwaka y el conflicto no ha cesado del todo, pero está en marcha una nueva conversación comunitaria liderada por las mujeres, que informa a los ciudadanos sobre la constitución y las leyes, la igualdad de género, la capacidad de acción de las mujeres, la responsabilidad de los hombres y una nueva visión de una provincia próspera libre de guerras y conflictos. Se está llevando a cabo un modesto proyecto que ha permitido que un amplio equipo de defensores y defensoras de los derechos humanos y mediadores y mediadoras de la paz de Jiwaka acoja y ayude a un equipo homólogo de Hela. A través de una serie de sesiones de información, formación, tutoría y entrenamiento, Voice for Change confía en que la construcción de puentes de solidaridad y preocupación mutua fortalecerá a las mujeres de Hela.

La ventana de asistencia para el desarrollo orientada a la igualdad de género de Australia y los programas de responsabilidad social corporativa de las empresas petroleras y de gas australianas que se benefician de los proyectos de recursos de Hela se presentan como defensores e innovadores para acabar con la violencia contra las mujeres. Los créditos fiscales de la industria extractiva y los programas de responsabilidad social de las empresas financian proyectos con fines políticos. Al tiempo que movilizan la ayuda en tiempos de desastre y, más recientemente, afirman encabezar los esfuerzos nacionales para avanzar en la igualdad de género y poner fin a la violencia contra las mujeres, se presentan como sólidos ciudadanos corporativos e importantes socios para el desarrollo. Sin embargo, allí donde se origina su riqueza, la sangre baña a las mujeres, las niñas y los niños atrapados en las nuevas formas de guerra armada, las protestas armadas de hombres y los niveles y formas más abominables y extremos de violencia contra las mujeres y las niñas.

La provincia de Hela no puede lograr la paz, la igualdad y el desarrollo sostenible mientras el Estado ignore sus conflictos tribales armados y la violencia extrema contra las mujeres. El Desarrollo Comunitario Corporativo y la Responsabilidad Social Corporativa de las industrias extractivas pueden, literalmente, emparchar los daños colaterales en las comunidades afectadas por la industria extractiva, pero no detendrán sus operaciones altamente rentables para garantizar la paz y el desarrollo social inclusivo y liderado localmente. Sus servicios humanitarios o sanitarios no pueden sustituir la responsabilidad del Estado y de los ciudadanos para poner fin a los conflictos armados y a la violencia contra las mujeres. Sin esta base, las industrias extractivas pueden seguir colaborando con los programas de ayuda australianos, complacer a un Estado corrupto de Papúa Nueva Guinea y aumentar la rentabilidad de las cinco mil empresas australianas que siguen haciendo negocios en Papúa Nueva Guinea, pero condenarán a las mujeres de Hela a una espiral de terror, muerte y destrucción, y dejarán la provincia como un enorme agujero negro de anarquía y violencia sobre el que se trazan planes para más proyectos de gas, oro y petróleo. ■

■ Bibliografía

Be'Soer, L. (2012). 'Leveraging Women's Rural Leadership and Agency', Quincuagésimo sexto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas [\[online\]](#) 27 de febrero - 9 de marzo de 2012 Nueva York. [Consultado el 3 de diciembre de 2017].

Filer, C. (2016). 'The Intractable Problem of Landowner Identification in the PNG LNG Project: An Historical Perspective'. State, Society and Governance in Melanesia SSGM seminar, 12 September, Stable [\[online\]](#) [Consultado el 10 de enero de 2017].

Comité Internacional de la Cruz Roja (2017). De las lanzas a las semiautomáticas: El coste humano del conflicto tribal en Papúa Nueva Guinea [\[online\]](#) [Consultado en diciembre de 2017].

Comité Internacional de la Cruz Roja (2017). Las viejas costumbres han desaparecido: Papua New Guinea's tribal wars become more destructive. [\[online\]](#) [Consultado en diciembre de 2017].

Kopi, M. (2011). Violence and Insecurity in the Southern Highlands of Papua New Guinea [\[online\]](#) [Consultado el 6 de septiembre de 2017].

Main, M. (2017). Papúa Nueva Guinea recibe una dosis de maldición de los recursos mientras el proyecto de gas natural de ExxonMobil fomenta los disturbios. Australian Broadcasting Corporation [\[online\]](#). 10 de marzo de 2017. [Consultado el 5 de diciembre de 2017].

Médicos Sin Fronteras (2011). Ocultos y desatendidos: Las necesidades médicas y emocionales de los supervivientes de la violencia familiar y sexual en Papúa Nueva Guinea [\[online\]](#) [Consultado el 5 de septiembre de 2017].

Médicos Sin Fronteras (2011). Hidden and Neglected: Las necesidades médicas y emocionales de los supervivientes de la violencia familiar y sexual en PNG. Port Moresby: Médicos Sin Fronteras (MSF), [\[online\]](#) [Consultado el 5 de septiembre de 2017].

Médicos Sin Fronteras (2016). Retorno al abusador: Gaps in Services and a failure to Protect Survivors of Family and Sexual violence in Papua New Guinea [\[online\]](#). [Consultado el 5 de septiembre de 2017].

Transparencia Internacional (2017). Índice de Percepción de la Corrupción. [\[online\]](#)

'Violencia contra mujeres y niñas en la provincia de Jiwaka, Papúa Nueva Guinea'. Voice for Change Community Survey Report, [\[online\]](#) (consultado el 5 de noviembre de 2017).

Organización Mundial de la Salud (2015). La mortalidad materna en Papúa Nueva Guinea. [\[online\]](#)

■ Notas

1- Alice Arigo, de la provincia de Hela, y Lilly Be'Soer, de la provincia de Jiwaka, defensoras de los derechos humanos de primera línea desde hace mucho tiempo y comprometidas con el fin de los conflictos violentos y la violencia contra las mujeres en sus respectivas nuevas provincias, fueron informantes clave para este estudio de caso.

Mujeres rurales en Colombia: De víctimas a protagonistas

por Cecilia López Montaña y María Claudia Holstine

Escribir el capítulo para el próximo volumen de DAWN en el que se basa este ensayo fue un trabajo de amor y lucha, pero un esfuerzo completamente justificado, porque Colombia está viviendo otro período difícil. Hoy, sin más fundamento que la ideología política, el nuevo gobierno opta por definir un conflicto armado bien documentado como atentados terroristas. Si esto prevalece, nuestras víctimas desaparecerán, convirtiéndose en meras víctimas del terrorismo. Con ello pierde toda la nación, pero especialmente las mujeres; millones de campesinas que pasaron de ser víctimas a protagonistas destacadas en esta larga y cruel guerra.

De los muchos documentos escritos por expertos nacionales e internacionales sobre la guerra de esta nación, pocos abordan las causas intrínsecas de la violencia de género contra las mujeres colombianas y sólo dentro de la definición tradicional de violencia sexual: violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, etc. De hecho, la violencia de género contra las mujeres (VGM) rara vez se considera en su concepción más amplia, ya que esos análisis tienden a pasar por alto los aspectos económicos, sociales, políticos y culturales relacionados con la situación de las mujeres en la guerra.

Los prejuicios de género negativos sobre las mujeres víctimas de la guerra, su contribución, los costos que soportan, sus nuevas funciones y su participación tanto en la guerra como en la paz forman parte de la desigualdad universal que prevalece entre mujeres y hombres en todo el mundo.

Las numerosas formas en que las mujeres participan en los conflictos armados y se ven afectadas por ellos suelen pasar desapercibidas para los analistas que limitan su visión a los abusos sexuales que sufrieron estas mujeres. Las condiciones económicas, sociales y políticas en las que viven las mujeres suelen dejarse de lado bajo la hipótesis encubierta de que desempeñan un papel mínimo en sus sociedades. En ese sentido, no hay disenso en cuanto a la situación de las mujeres colombianas: parecen seguir el manual; su experiencia es sorprendentemente parecida a la de las mujeres en otras guerras. Sin embargo, el simple hecho de ampliar el espectro de análisis para incluir un enfoque de economía política redefine los costos que pagaron estas mujeres y su contribución a la construcción de la paz.

El conflicto de Colombia en pocas palabras

El pueblo colombiano sigue luchando por “las complejidades de un conflicto interno de sesenta años en el que el narcotráfico y el terrorismo actúan como uno solo, en el que un importante cambio de valores de la población va de la mano de la corrupción gubernamental, con innumerables actores nacionales e internacionales implicados, y con considerables intereses económicos y políticos en juego... cuestiones nunca vistas a la vez en la historia de ningún otro país” [Cueter 2015, 24].

Tras la firma del Acuerdo Final con las FARC, Colombia comenzó su largo camino hacia la paz sin que muchos entendieran realmente el

contexto de la guerra, sus raíces, sus actores, o lo profundamente que sus facetas dañaron al pueblo colombiano, y especialmente, cómo impactó a las mujeres. La verdad es que las mujeres no son meras víctimas sino protagonistas esenciales; pero las acciones emprendidas para fortificar esta nueva paz contrarrestan ese título al excluirlas de este importante proceso.

¿Cuándo empezó todo realmente?

Una de las cuestiones más controvertidas en torno a este conflicto es su inicio, un factor central para identificarlo y resolverlo realmente. Las numerosas guerras civiles entre liberales y conservadores desde el siglo XVIII hasta el XX son clave para entender la naturaleza violenta del pasado de Colombia. Colombia sufrió La Violencia (1948-1958), descrita por Guzmán et al. (1962, 405) como “...una época de crueldad bipartidista en la que la violencia se convirtió en un proceso social, en la que las élites políticas acallaron a quienes no estaban de acuerdo con sus puntos de vista”. El germen de las guerrillas en Colombia creció como resultado de los feroces ataques contra los liberales perpetrados por los chulavitas, la policía secreta del gobierno conservador de Ospina. Para enfrentarla, simples campesinos liberales se armaron para proteger sus comunidades y tierras; pero no eran guerrilleros propiamente dichos.

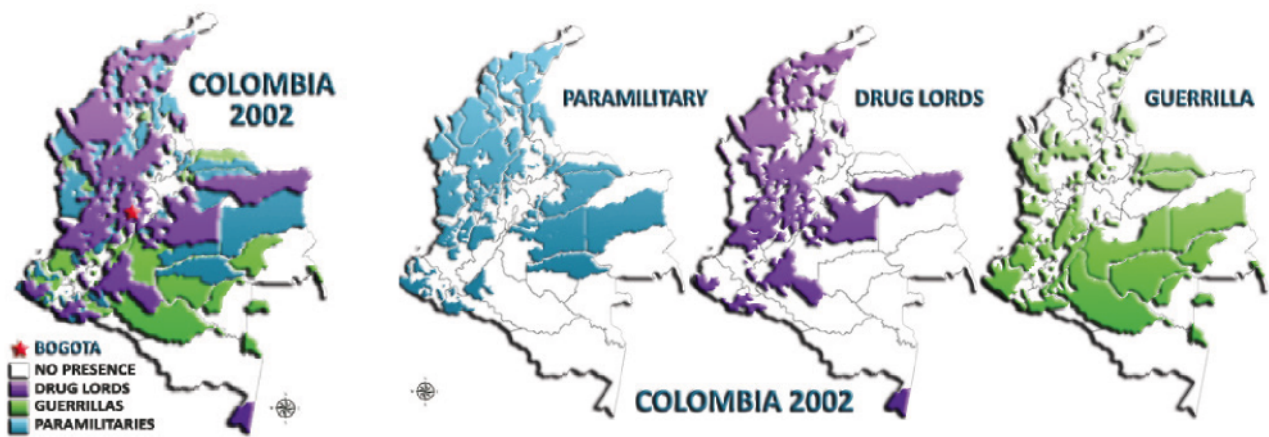
Esta guerra terminó con el acuerdo de paz Frente Nacional (1958-1974) donde el poder se repartió entre los principales partidos políticos pero excluyó a los movimientos de izquierda. El presidente Lleras Camargo [1958-1962] nombró a grupos armados de campesinos liberales como policía militar rural durante el primero de estos gobiernos, pero bajo el siguiente gobierno conservador de Guillermo León Valencia [1962-1966] un despiadado ataque de 16.000 soldados colombianos y estadounidenses devastó Marquetalia, donde residía todo el grupo de izquierda combatiente: un total de cincuenta

hombres y dos mujeres [Verdad Abierta, 2013]. Cinco sobrevivieron y regresaron meses después, fuertemente armados y con setenta y cinco hombres para anunciar la formación de las FARC (1964).

La explicación más coherente de por qué es tan difícil ponerse de acuerdo sobre el inicio de la guerra radica en el único actor constante a lo largo de los diferentes momentos históricos del pasado violento de la nación: los grupos guerrilleros. Pocos ven la naturaleza y las características cambiantes detrás de sus acciones, y menos aún, los cambios dentro del grupo que pasó de campesinos armados liberales, a policía militar rural gubernamental, y finalmente, a un grupo revolucionario financiado por el narcotráfico. De 1968 a 1980 no se registran actos de guerra de guerrillas; la falta de financiación es una posible explicación del silencio. Pero en 1982 las FARC volvieron más fuertes, con 3.000 hombres dispuestos a enfrentarse a los militares colombianos. Sus acciones ya no eran sólo ideológicas, sino también impulsadas por el deber de vigilar los negocios de sus financiadores, el narcotráfico y las valiosas rutas de salida de Colombia. Nació un conflicto diferente, que ya no era sólo político, sino que tenía una motivación financiera.

¿Quién lucha contra quién?

Para entender la violencia de género en Colombia es importante diferenciar los grupos en guerra y entender qué motivó sus acciones violentas contra las mujeres. Crandall [1999, 223] afirma que “incluso quienes hacen carrera en el seguimiento de los acontecimientos en este país andino son a menudo incapaces de diferenciar claramente entre los grupos beligerantes actualmente activos, y mucho menos sus objetivos, fuentes de financiación y grado de apoyo popular”. Por eso es difícil comprender no sólo el papel de todos los implicados, sino sobre todo, cómo cada uno de ellos pasó rápidamente de amigo



Fuente: Cueter, Nicolas (2015). *Atrapados entre la guerra contra las drogas y la guerra de guerrillas: El camino de Colombia hacia la paz.*

a enemigo y viceversa, según la ubicación geográfica o el estatus social de la persona consultada.

Establecer que la guerrilla no es el único enemigo en esta guerra es primordial para comprender plenamente la violencia contra las mujeres en el conflicto colombiano, ya que éstas soportaron la crueldad y diferentes formas de brutalidad a manos de al menos otras dos fuerzas armadas. El grupo más despiadado surgió cuando sectores de las élites, incluidas las empresas multinacionales, financiaron a las fuerzas paramilitares para proteger sus tierras y actividades del impuesto de la guerrilla o para evitar el secuestro. Los grupos paramilitares son incluso más antiguos que la guerrilla. Un responsable clave pero no reconocido fue la Fuerza Militar Colombiana que cometió crímenes atroces contra la población rural sin razón ni explicación. Las Fuerzas Militares y los paramilitares compartieron su apoyo al establecimiento, pero lo más importante es que los valores patriarcales son los más prominentes en sus acciones.

Hombres patriarcales, mujeres sin rostro

En las estructuras sociales patriarcales los hombres son proveedores y las mujeres cuidadoras; pero se añaden dos nuevas dimensiones para las mujeres rurales

en Colombia. La primera, la violencia intrafamiliar, afecta a las mujeres rurales desde muy jóvenes. Ellas soportan alguna forma de transgresión física por parte de padres, hermanos, esposos u otros varones conocidos [INML, 2015]. La violencia sistemática se sufre en privado, y en la mente de las mujeres, el abuso que reciben es normal, un tipo de violencia menor; aunque crea angustia y no ofrece un espacio para lidiar con las consecuencias físicas o mentales. La segunda es causada por el gobierno; sus leyes, políticas sociales y económicas, y la estrecha comprensión de los valores patriarcales por parte de las instituciones. Hasta 1988, las mujeres rurales no podían poseer tierras. Como resultado, muy pocas mujeres rurales realizan tareas agrícolas, pero están sobrerrepresentadas en los servicios informales [DNP 2015a]. Las instituciones rurales siguen siendo tan patriarcales como los hombres rurales. Las políticas sociales públicas enfatizan el papel de las mujeres como cuidadoras débiles e indefensas, reforzando el papel de los hombres como protectores necesarios más que como proveedores. En consecuencia, los préstamos son para los hombres y no para las mujeres, y la asistencia técnica ignora el interés o la necesidad de las mujeres. Por estas razones, “las mujeres rurales colombianas son las más pobres del país” [López M., 2011], y entran en la guerra siendo vulnerables: objetivos fáciles para los perpetradores.

Apertura, un oxímoron peligroso

Gates et al. [2012, 1720] creen que “el conflicto tiene claros efectos perjudiciales sobre la pobreza, el hambre, la educación primaria, la reducción de la mortalidad infantil y el acceso al agua potable”. Sin embargo, Colombia desmiente esta afirmación. A lo largo de la guerra, su economía experimentó un crecimiento económico continuo, salvo un año [BanRep, 2016]. Los avances sociales también fueron significativos, incluso en el sector rural, donde la pobreza disminuyó del 61,7% en 2002 al 38% en 2016 [DANE, 2017]. Sin embargo, demasiadas personas siguen siendo muy pobres, y el crecimiento experimentado no puede ocultar que las diferentes facetas de esta confrontación sí afectaron el desarrollo del país.

Además, dos decisiones económicas gubernamentales se unieron a la guerra y son igualmente culpables de la devastación sufrida por la Colombia rural. Su mayor impacto económico amplió la brecha rural-urbana, lo que habla directamente de la rapidez con la que los centros urbanos se desarrollaron y crecieron al no tener que luchar contra la guerra que amenazaba a los colombianos rurales.

Cueter [2015] explica que “la globalización toca el corazón del conflicto [pues] la Apertura de 1990, la iniciativa de globalización del país fue un proceso que obligó a Colombia a salir de su economía autocontenida hacia el mercado abierto”. Siguiendo el Consenso de Washington, el presidente Gaviria [1990-1994] ignoró la base productiva del país al implementar una Apertura bastante rápida y poco planificada. Como consecuencia, los pequeños productores perdieron un millón de hectáreas mientras que la agricultura a gran escala se extendió sobre las tierras que perdieron los campesinos. Sin embargo, debido a ello, “la relación entre empresarios y paramilitares pasó de la protección a la expansión” [Ibid.]. El objetivo era obligar a los

campesinos a abandonar sus tierras y las cifras de desocupación aumentaron al mismo tiempo que la producción agroindustrial floreció.

“La descentralización juega un papel muy importante [en] la escalada del conflicto” [Mantilla 2012, 55] pues la Apertura transfirió todos los recursos públicos destinados a la salud, la educación y los servicios públicos a las administraciones regionales. En 1991, la elección de alcaldes y gobernadores por voto popular también transfirió el poder político a las regiones. Los grupos paramilitares impusieron sus propios candidatos para hacerse con los fondos descentralizados.

Las mujeres rurales, ¿epicentro de una guerra?

La tragedia más conocida de Colombia es el inmenso número de desplazados internos como consecuencia de la guerra: más de siete millones. El Registro Único de Víctimas (RUV) [2017] muestra que las mujeres son el 51,3% del total de la población desplazada, una pequeña diferencia con respecto a los hombres, pero que no es suficiente para hablar de una persecución sistemática contra las campesinas, ni para considerar el desplazamiento como un delito de VG para familias enteras, como grupo, que huyen de las zonas violentas afectadas por la guerra.

Las amenazas aparecen como un factor de victimización clave por sus vínculos con el desplazamiento familiar, pero el escaso número de casos reportados en comparación con los casos de desplazamiento descarta a los primeros como causa viable de los segundos. Este patrón se repite desde el despojo de tierras hasta todos los demás factores de victimización, lo que demuestra sin ambigüedad que hombres y mujeres sufrieron lo mismo, excepto en cuatro casos; los hombres sufrieron más lesiones por artefactos explosivos improvisados, tortura y reclutamiento forzoso, y cuando se trata de violencia sexual, los delitos fueron

perpetrados principalmente contra las mujeres. Los datos oficiales recogidos sobre actos de victimización durante el conflicto, limitan la violencia de género únicamente a los casos de violencia sexual denunciados.

A pesar de ello, no es de extrañar que en una guerra con demasiados grupos armados con fuertes valores patriarcales, las mujeres rurales representen el 92% de los 18.356 delitos sexuales registrados; sin embargo, de ellos, sólo el 1% son niñas de 0 a 11 años y el 2% de 12 a 17 años. Según la Fiscalía, el 45,8% de los ataques de violencia sexual son obra de los paramilitares, el 19,4% de la fuerza pública y el 8,5% de la guerrilla [Colombia Reports, 2015b].

En general, las amenazas, más que la violencia sexual contra las mujeres, son estadísticamente más motivo de desplazamiento. ¿Cómo es posible? La historia colombiana muestra que la violencia sexual contra las campesinas no se deriva únicamente de la guerra, sino que es intrínseca a la cultura rural. Sin embargo, esta es una generalización muy laxa que agrupa a todos los victimarios en un solo grupo, lo que claramente oculta la magnitud de los horribles actos de violencia contra las mujeres rurales, pero sobre todo, oculta abiertamente la razón de por qué y cómo las mujeres pasaron de ser víctimas a protagonistas en esta guerra en lugar de ser destruidas por las transgresiones sexuales que soportaron.

Los paramilitares utilizaron diversas formas de violencia sexual contra las mujeres. Redefinieron los roles de género como protectores y protegidos. Para ellos, la violencia sexual era un método, y las mujeres el medio para aplicarla, convirtiendo a las mujeres en el arma más eficaz en esta larga guerra.

Aunque los hombres de las zonas rurales son los perpetradores en casa, su papel como protectores públicos es también una

característica vital. La incapacidad de detener los actos de violencia de género contra sus mujeres frente a sus comunidades destruyó su masculinidad. Los protectores se acobardaron convirtiéndose en inútiles. Las mujeres se convirtieron en el talón de Aquiles de los hombres rurales. Todo lo que necesitaron los paramilitares para controlar zonas enteras del país fue exponer públicamente la incapacidad de los hombres para proteger a sus mujeres, y al hacerlo, destruyeron con éxito a los hombres patriarcales y obligaron a comunidades enteras a abandonar sus tierras.

Además, el hecho de tener el control político y fiscal de muchos pueblos llevó a otra forma de violencia de género paramilitar que redefinió la línea entre mis mujeres y las de mis enemigos. Imponían con dureza a sus mujeres los viejos valores patriarcales restringiendo su forma de vestir, el largo de su cabello y, especialmente, su conducta sexual dividiendo a las campesinas entre madres forzadas y prostitutas para mantener también la cohesión entre las tropas.

Las fuerzas militares colombianas utilizaron métodos similares contra las mujeres civiles. Las agresiones sexuales por parte de los soldados son definitivamente más dañinas y perjudiciales para las mujeres, ya que representan la máxima autoridad; hombres que alguna vez juraron proteger a los civiles con su propia vida. Sus abusos sexuales aumentan la vulnerabilidad y el miedo de las mujeres, equiparando rápidamente la transgresión a no tener a nadie que proteja o defienda sus vidas. La autoridad forense de Colombia confirma que en más del 50% de los 219 casos de violación denunciados oficialmente entre 2008 y 2010, las víctimas indicaron que el agresor era un policía o un soldado del ejército [INML, 2015].

Las ‘guerrillas’ no “utilizaron la violencia sexual para imponer el control social y territorial sobre las actividades cotidianas

de las mujeres” [CNMH, 2013]. Los abusos contra mujeres civiles atribuidos al grupo son casos aislados y no siguen patrones o razones específicas. Esto lleva a preguntarse: ¿qué protegía a las mujeres civiles de la violencia sexual de las FARC? Tal vez la respuesta esté en el 40% de combatientes mujeres que convivían con los hombres en una tropa supuestamente más igualitaria en términos de género, la única que incorporaba mujeres. Dado que las guerrilleras estaban encargadas de las relaciones con la comunidad, participar, condonar o ignorar la violencia sexual contra las mujeres civiles pondría en peligro ese papel.

■ De víctima a protagonista

Los conflictos en todo el mundo identifican a las mujeres como víctimas. Uno de los problemas de limitar la condición de las mujeres durante los conflictos a la de víctimas es la conclusión de que las mujeres -y los abusos contra ellas- no son más que víctimas de la guerra; un término que indica “temporalidad en la condición de víctima, ..., con un mensaje oculto que transmite que los ciudadanos inocentes son víctimas ‘por casualidad, accidentalmente, sin mucha reflexión o premeditación...” [Cueter 2015, 81]. En Colombia los crímenes contra las mujeres no fueron simplemente fortuitos ni accidentales.

Mujeres en armas

Un estereotipo muy común es que durante la guerra “todos los hombres están en las milicias, todas las mujeres son víctimas” [Enloe 2004, 99]. La existencia de mujeres combatientes en los grupos guerrilleros está documentada desde la década de 1970, y las mujeres ingresaron a las Fuerzas Militares de Colombia en 1976 [ENC, 2015]. Llegaron tarde al combate, y su papel como integrantes de los diferentes grupos armados es revelador.

Los grupos paramilitares siguen siendo reacios a la incorporación de las mujeres a sus fuerzas por considerar que la feminidad está reñida con la vida militar [Otero, 2006]. Rechazan por completo la idea de las mujeres en combate, basando su escepticismo en la incapacidad de las mujeres para luchar sin miedo. Un puñado de mujeres paramilitares llegaron a ser comandantes, pero su único cargo era controlar a otras mujeres [Acosta, 2015]. Las Fuerzas Armadas colombianas no autorizaron a las mujeres a participar en el combate activo hasta 2012 [Vergel 2012, 236], quizás para protegerlas de las atrocidades sexuales que el personal militar perpetraba contra las mujeres civiles.



Photo: <http://blogpinceladas.blogspot.com/>

Las FARC fueron las que más abrieron las puertas a las mujeres. Entraron en sus filas de dos maneras: [1] por la fuerza, cuando secuestraron a niñas para adoctrinarlas, o [2] comprando un discurso muy igualitario que promovía la igualdad de derechos y tareas para los combatientes, tanto hombres como mujeres. Las mujeres de las FARC portaban armas y participaban activamente en la batalla. Las tareas de cuidado se distribuían equitativamente entre los géneros, pero las

mujeres eran las únicas con deberes sexuales obligatorios; una directiva que equivalía a la violación.

A pesar de las enormes diferencias entre estas tres fuerzas armadas, el porcentaje de mujeres combatientes en las fuerzas armadas es un síntoma de la percepción que cada grupo tiene de las mujeres, de sus políticas explícitas y de las normas implícitas sobre la participación femenina. Lo que es indiscutible es que, independientemente de lo progresista que sea el discurso de igualdad de género de cada grupo, al final, incluso los más progresistas vuelven a los valores patriarcales tradicionales que intentan controlar lo que las mujeres pueden o no pueden hacer.

La sociedad colombiana tilda a todas estas mujeres de víctimas, ya que a muchos les resulta incomprensible aceptar que algunas guerrilleras eligieran esa vida y participaran voluntariamente en el combate, restándole importancia al hecho de que, al elegir participar en la guerra como soldados, “superaron los estereotipos femeninos y traspasaron fronteras insalvables que antes les estaban vedadas” [Wills 2005, 63]. [Wills 2005, 63]. Las mujeres en armas son quizás el mejor ejemplo de cómo las mujeres pasaron de víctimas a protagonistas en el conflicto colombiano, pero no son las únicas que lo hicieron.

El ascenso silencioso de las campesinas civiles

Mientras las mujeres en armas luchaban para que se respetara su opción profesional, las mujeres civiles campesinas emprendieron un camino diferente, uno en el que sus voces se convirtieron en su arma.

Su lucha en medio de los valores patriarcales comenzó mucho antes de la ferocidad de la guerra. Las campesinas civiles lucharon por ser incluidas en los movimientos rurales de

los hombres durante los años 60. Lucharon por su derecho a defender las actividades de cuidado, pero fueron subestimadas e ignoradas como sujetos políticos [DDP, 2014].

En los años 80, en medio de la intensidad de la guerra por la protección de las rutas de la coca, estas mujeres jugaron un papel vital reclamando derechos económicos y políticos a través de sus propios movimientos. El gobierno reconoció la necesidad de formular estrategias específicas para las campesinas. Después de cuatro años de su imparable presión, la Ley Agraria 30 de 1988 -reafirmada en 1994- obligó a los hombres a añadir los nombres de las mujeres como propietarios en igualdad de condiciones en sus títulos de propiedad rural [Congreso de Colombia, 1988].

El activismo de las mujeres rurales se amplió durante los años 90. Poco después del regreso de los grupos paramilitares, la guerra se volvió por primera vez contra las campesinas civiles. La escalada de violencia fortificó las voces femeninas y la protección de sus seres queridos y sus comunidades aumentó su exposición forzando acciones concretas de su gobierno. Su tardía respuesta y la violencia causada por las Fuerzas Militares enviadas a protegerlas, despertaron a las mujeres al poder que ofrece el estatus político. Las mujeres afro rurales se convirtieron en el primer grupo femenino invitado a participar en la redacción de la Constitución de 1991 [ídem].

La promulgación de la Ley 731 de 2002 permitió a las mujeres rurales el acceso a los bienes públicos, la cobertura de los beneficios agrarios y abrió un espacio real para su participación política [Congreso de Colombia, 2002]. Su logro más importante fue la promulgación de la Ley 1448 de 2011, ya que finalmente reconoció la larga guerra de Colombia y sus víctimas. Lamentablemente, esta ley no reconoce el papel crucial de las campesinas como fuerza detrás de los mandatos vitales del Estado que transforman

la vida de todas las mujeres colombianas. Desgraciadamente, sus notables avances se frenaron cuando los paramilitares silenciaron sus voces al atacar sus movimientos y forzar su declive [Ibid., 35]. Sin embargo, señalar a los paramilitares como los únicos culpables de la desaparición de los movimientos campesinos sin mencionar el papel del Estado no honraría la vida de las mujeres que murieron luchando por sus derechos, sus familias y sus comunidades.

Las mujeres, el camino para que la guerra rural entre en las ciudades

Las zonas rurales fueron el campo de batalla de este largo conflicto. Pero esta guerra llegó a las ciudades a través de un canal muy inesperado: las mujeres. El desplazamiento obligó a más de siete millones de hombres, mujeres, niñas y niños del campo a llegar de forma repentina y constante a pueblos y ciudades que no estaban preparados para recibirlos. No fue una transición fácil para esas familias rurales que se encontraron con las manos vacías, en medio de ciudades con ritmos vertiginosos, demasiado diferentes de su origen. La respuesta de emergencia inicial del gobierno fue relativamente rápida; pero la búsqueda de soluciones a largo plazo para integrarlas en la vida urbana o ayudarlas a regresar a sus tierras sigue siendo lenta.

Las mujeres rurales volvieron a demostrar su flexibilidad innata para adaptarse a entornos difíciles y a nuevas situaciones. Mientras que los hombres tuvieron dificultades porque sus conocimientos eran inútiles en los centros urbanos, las mujeres se pusieron rápidamente a la altura de las circunstancias aprovechando la gran demanda de su campo de conocimientos: los servicios de cuidados. Pero las mujeres se enfrentaron a una nueva ola de violencia de género cuando los hombres rurales desplazados, frustrados y desempleados, vieron cómo sus campesinas se empoderaban, ganaban autonomía económica

y asumían el papel de proveedoras. La consecuencia: la violencia doméstica entre los desplazados es mayor que entre los que aún viven en las zonas rurales [Ibáñez et al., 2011].

El narcotráfico, otra faceta de la guerra aunque no siempre reconocida como parte de ella, también afectó a las mujeres. “El lado más oscuro de la narcobelleza dio lugar a una inexplicable forma de tráfico de personas por consentimiento cuando... “las niñas y jóvenes de las aldeas rurales, o incluso de los barrios de clase baja, [eran] llevadas a la fuerza o de acuerdo con los padres para ser “chuleadas” a la perfección; o cuando ellas mismas tomaban la iniciativa de ir a la gran ciudad para “hacerla grande”,... para que un hombre rico les resolviera sus problemas económicos” [Ibid.]. En esencia, “el legado de la cultura de la droga pretendía perder a la mujer haciéndola más invisible, inducir a los hombres a ver primero los objetos con curvas, sustituir la educación por la belleza.”

“Pero las mujeres se enfrentaron a una nueva ola de violencia de género cuando los hombres rurales desplazados, frustrados y desempleados, vieron cómo sus campesinas se empoderaban, ganaban autonomía económica y asumían el papel de proveedoras.”

Las mujeres rurales, la fuerza de Colombia

Esta guerra que se libra en la Colombia rural no se ajusta a ninguna categoría ni teoría. Sus múltiples y complejos escenarios exigen una mente abierta para darse cuenta de la relación entre la Economía Política y la violencia de género. Para llegar a una comprensión clara de esta guerra, hay que analizar primero las raíces que alimentan el conflicto, y luego, los hombres colombianos. ¿Qué impulsó a estas mujeres a convertirse en protagonistas y no sólo en víctimas? La respuesta es desconcertante, pero lo que es indiscutible es que estas mujeres derribaron cinco paradigmas tradicionales:

Primero: La violencia sexual destruye a las mujeres. Las campesinas se levantaron silenciosa pero decididamente contra la violencia y fueron responsables de lo que Stewart [2010, 2] llama “complejas redes de movimientos a favor de la paz”. Los logros de las mujeres rurales se miden por el número de leyes nacionales promulgadas en su favor.

Segundo: El conflicto no afectó los roles de género. En esta guerra, las normas patriarcales trabajaron más contra los hombres rurales que contra las campesinas. Las fuerzas paramilitares convirtieron a las mujeres en eficaces armas de guerra que destruyeron rápidamente la masculinidad de los hombres rurales y comunidades enteras.

Tercero: Las políticas económicas son neutrales en términos de género y violencia de género. La Apertura se unió al conflicto e impactó negativamente a las mujeres al renovar viejas alianzas entre terratenientes y paramilitares, lo que dio lugar al desplazamiento.

Cuarto: Las políticas públicas son neutrales en términos de género o de violencia de género. La descentralización se unió a la

guerra abriendo la puerta a diferentes formas de violencia de género.

Quinto: La rivalidad de los roles de género proviene de la globalización competitiva. En Colombia, la rivalidad de género es implacable entre hombres y mujeres desplazados. Una masculinidad aplastada provocó un aumento de la violencia de género.

Pensamientos finales

El asombroso cambio de las mujeres rurales colombianas de víctimas a protagonistas cruciales en el conflicto no se entendería del todo sin incluir las perspectivas económica y social, pero sobre todo es imposible sin la contribución de las debilidades de los hombres.

Sin ayuda y en silencio, estas mujeres influyeron en el cambio de toda una nación, no sólo para ellas mismas sino para las futuras generaciones de mujeres rurales y urbanas. Son un mensaje para el mundo sobre la necesidad de mirar más allá de lo obvio cuando se trata de estudiar a las mujeres y lo que afecta a sus vidas. ■

Bibliografía

Acosta H., Cindy Lorena (2015). “Violencia Basada en el Género y Guerra: Mujeres, Violencia Sexual, Desplazamiento Forzado y Restitución de Tierras en el Departamento del Magdalena 1999 a 2012”. Criterios - Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, 8, no. 2. Bogotá: Universidad de Buenaventura.

Banco de la República (2016). Indicadores Económicos. Bogotá: Banco de la República. [\[online\]](#)
Centro Nacional de Memoria Histórica (2013). ¡Basta Ya! 1-434 Bogotá: Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.

Informes de Colombia (2015a). “Entendiendo el conflicto colombiano: la desigualdad”. En Proceso de paz, en línea: Colombia Reports. [\[online\]](#)

(2015b). “Quién comete más delitos sexuales en el conflicto de Colombia”. Por Guggenheim, Julia y Alice Bradshaw-Smith, En línea: Colombia Reports. [\[online\]](#)

- Congreso de Colombia (1988). Ley 30 de 1988 - Otorga Facultades al Presidente de la República. 38.264, Diario Oficial No. Ley 30. Bogotá: Gobierno de la República.
- (2002). Ley 731 de 2002 - Normas para Favorecer a las Mujeres Rurales. Ley 731. Bogotá: Gobierno de la República.
- Crandall, Russell (1999). "El fin del conflicto civil en Colombia: Los militares, los paramilitares y un nuevo papel para Estados Unidos". SAIS Review 19, no. 1. Amherst: Universidad de Massachusetts.
- Cueter, Nicolas (2015). "Atrapados entre la guerra contra las drogas y la guerra de guerrillas: El camino de Colombia hacia la paz". Master of Arts in Liberal Studies (MALS). Washington, DC: Universidad de Georgetown.
- Defensoría del Pueblo (2014). El Conflicto Armado y el Riesgo para la Mujer Rural. Sistema de Alertas Tempranas Bogotá: Torre Gráfica.
- Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2015). Tercer Censo Nacional Agropecuario. Online: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2017a). Exportaciones - Junio 2017. Boletín Técnico. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2017b). Presentación Resultados de Pobreza 2016. Presentación. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- Departamento Nacional de Planeación (2015a). Sal- dar la Deuda Histórica con el Campo. Marco Conceptual. Bogotá: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- (2015b). El Campo Colombiano: Un Camino Hacia el Bienestar y la Paz. Misión para la Transformación del Campo TOMO 3. Bogotá: Gobierno de la República.
- Ejército Nacional de Colombia (2015). Mujer Militar; Igualdad y Liderazgo. Online: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- Enloe, Cynthia (2004). "The Politics of Masculinity and Femininity in Nationalist Wars." On The Curious Feminist: Searching for Women in the New Age of Empire, Ch. 7. Berkeley: University of California Press.
- Gates, Scott, Håvard Hegre, Håvard Moksleiv Nygård, & Håvard Strand (2012). "Development Consequences of Armed Conflict." World Development 40, no. 9. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier.
- Guzmán Campos, Germán, Orlando Fals Borda, & Eduardo Umaña Luna (1962). La Violencia en Colombia: Estudio de un Proceso Social. I of II. 1-458 Bogotá: Editorial Tercer Mundo.
- Herrera, Natalia, & Douglas Porch. (2008). "'Like Going to a Fiesta' - the Role of Female Fighters in Colombia's FARC-Ep." Small Wars & Insurgencies 19, no. 4. Online: Taylor & Francis Online. [\[online\]](#)
- Ibáñez, Ana María, Margarita Gáfaró, & Valentina Calderón (2011). "Desplazamiento Forzoso, Participación Laboral Femenina y Poder de Negociación en el Hogar: ¿Empodera el Conflicto a las Mujeres?" Documentos CEDE, no. 45. Bogotá: Universidad de los Andes.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015). Violencia Sexual en Colombia. Forensis. Bogotá: Gobierno de la República.
- López M., Cecilia (2011). "Diseño y Formulación de Políticas para las Mujeres Desplazadas." En El Reto Ante la Tragedia Humanitaria del Desplazamiento Forzado: Superar la Exclusión Social de la Población Desplazada. Primera Ed., Ch. 11. Bogotá: CODHES.
- Mantilla V., Silvia (2012). "Economía y Conflicto Armado en Colombia." Latinoamérica 55, no. 2. México: Universidad Nacional de Colombia. [\[online\]](#)
- Otero B., Silvia (2006). Colombia: Las Mujeres en la Guerra y en la Paz. Lo Femenino de las FARC y de las AUC. Online: ReliefWeb. [\[online\]](#)
- Registro Único de Víctimas (2017). Red Nacional de Información. Online: Gobierno de la República. [\[online\]](#)
- Stewart, Frances (2010). "Women in Conflict and Post-Conflict Situations." Development Cooperation Forum. Nueva York: UN Economic and Social Council.
- Vergel, Carolina (2012). "Entre Lutte Armée Et Féminisme: Quelques Reflexions À Propos Des Femmes Combattantes en Colombie." Revista Derecho del Estado, no. 29. Bogotá: Universidad Externado de Colombia.
- Wills, María Emma (2005). "Mujeres en Armas: ¿Avance Ciudadano o Subyugación Femenina?" Análisis Político, no. 54. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. [\[online\]](#)

“Periferia atrincherada”: Mujeres, economía política y el mito de la construcción de la paz en el noreste de la India

por Roshmi Goswami



El noreste de la India ha sido una región de prolongados conflictos subnacionales que han durado varias décadas, durante las cuales se creó una próspera economía de guerra. Este estudio de caso explora los procesos de paz en tres contextos diferentes dentro de la región y Goswami se pregunta si han tenido como objetivo acabar con las desigualdades sociales y de género profundamente arraigadas y garantizar la justicia, o si son meros “acuerdos” dentro de un marco patriarcal que simplemente continúa con las desigualdades arraigadas. En otras palabras, se pregunta: ¿proporcionan alguna prueba de un intento de “transformación social” o de lograr la justicia de género?

Estudios de caso: Conflictos y negociaciones de paz

Uno de los tres casos analizados es el conflicto Indo-Naga, uno de los más antiguos de Asia meridional, que se remonta a la inclusión forzada de las colinas Naga en la India británica en 1881. Se intensificó en 1951, cuando un plebiscito dio como resultado que el 99% de la población votara a favor de la independencia de Naga. En 1958, el Estado indio dotó a sus fuerzas armadas de poderes ilimitados para reprimir el movimiento independentista, mediante la promulgación de la Ley de Fuerzas Armadas

(poderes especiales), que sigue vigente hasta la fecha y se utiliza para impedir los derechos fundamentales de los ciudadanos y las ciudadanas. Desde entonces, Nagaland ha sido testigo de años de extensas e intensas operaciones de contrainsurgencia por parte del Estado indio, que incluyen operaciones de peinado, detenciones arbitrarias e incendios de pueblos enteros, todo ello marcado por niveles extremos de violencia y brutalidad.

Las mujeres naga han sido un objetivo especial y estratégico: violadas, abusadas sexualmente y maltratadas para escarmentar a los “insurgentes/rebeldes” y romperlos psicológicamente. Muchos de los casos de brutalidad tuvieron lugar en el interior o en las inmediaciones de las iglesias, que eran lugares sagrados considerados con inmensa reverencia y temor por los nagas recién convertidos. Estas violaciones hirieron profundamente y mutilaron la psique de un pueblo conocido por ser extremadamente protector con sus mujeres, niñas y niños y que históricamente contaba con una estructura de defensa bastante elaborada, manejada por los guerreros más capaces y valientes. Para el Estado indio y sus fuerzas de seguridad, la intensidad de la violencia sexual estuvo determinada en parte por la “omisión” de los pueblos de la periferia. Al ser claramente diferentes en apariencia, comida, cultura y religión de la “India continental”, la “alteración” de los nagas fue fácil.

En 1997, el gobierno firmó un alto el fuego con una de las dos facciones principales del Consejo Nacional Socialista de Nagaland, la facción Isak-Muivah (NSCN-IM). En 2001 se firmó un acuerdo de alto el fuego similar con la facción SS Khaplang (NSCN-K). Tras unas ochenta rondas de conversaciones, en 2015 se llegó a un Acuerdo Marco Naga (NFA) con el Gobierno indio. Sin embargo, este esperado acuerdo de paz naga ha estado envuelto en un profundo secretismo, sin que se haya aclarado su contenido real ni la situación de la controvertida demanda de unificación naga.

Las organizaciones de la sociedad civil, como el consejo tribal supremo, Naga Hoho, la Iglesia¹ y las mujeres, bajo la égida de la Asociación de Madres Naga (NMA), han desempeñado un papel notable en la mediación de la paz y en el cese de los asesinatos fratricidas entre las distintas facciones armadas. Aunque el papel de la NMA en la determinación de los términos del acuerdo de alto el fuego es especialmente loable, también ha ido más allá del cese inmediato de la violencia para cuestionar asuntos estructurales más profundas de la violencia contra las mujeres y sigue abogando por una participación más sustantiva de las mujeres en la construcción del Estado. Al igual que las luchas de los naga, las aspiraciones de los mizo por la autonomía y el autogobierno también son anteriores a la independencia de la India, pero llegaron a su punto álgido en los años sesenta, cuando el Frente Nacional Mizo (MNF) lideró un movimiento secesionista que pretendía establecer una nación cristiana soberana. Duró hasta que se firmó el Acuerdo de Paz o el Memorando de Acuerdo en 1986. El movimiento del MNF también se enfrentó a operaciones de contrainsurgencia extremadamente brutales y contundentes por parte del Estado indio. Se invocó la Ley de Áreas Perturbadas de Assam de 1955 y la Ley de Fuerzas Armadas (Poderes Especiales) de 1958, proclamando todo el distrito de Mizo como “perturbado”. Esto permitió y proporcionó impunidad para los arrestos arbitrarios, las detenciones y los asesinatos de personas inocentes, la brutalización y la extrema humillación de los hombres, el saqueo de las aldeas y la violación y el abuso sexual desenfrenados de las mujeres. Las operaciones más significativas fueron los ataques aéreos de las fuerzas aéreas indias con bombas incendiarias en territorio civil contra sus propios ciudadanos, sin precedentes en ningún lugar del país.



Noreste de la India. Fuente: wikipedia.org

La otra operación profundamente subversiva fue la reagrupación masiva de aldeas en unidades más grandes (Plan de Agrupación de Aldeas) llevada a cabo mediante el desalojo y el reasentamiento coercitivo, bajo la supervisión de los militares. La resistencia a este plan fue respondida con brutalidad y graves violaciones de los derechos humanos: se violó a las mujeres, se incendiaron las cosechas, se quemaron los antiguos pueblos y se mantuvieron los nuevos asentamientos bajo el control de las fuerzas armadas. La agrupación provocó un trastorno traumático en la comunidad mizo; un sufrimiento que se denomina “herida del espíritu”. Unos 5.200 pueblos (casi el ochenta por ciento de la población rural) se vieron afectados. Se intensificó la vigilancia, se erosionaron los conocimientos tradicionales y el acceso a los bosques más allá de los límites permitidos; en consecuencia, toda una comunidad que era autosuficiente en la agricultura pasó a depender totalmente del Gobierno.

Dado que un gran número de mujeres solteras se presentaron como voluntarias en la MNF, los militares indios sospecharon de ellas y, en consecuencia, fueron víctimas de un fuerte acoso. La brutal violación en grupo de dos mujeres jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad en 1966 es un caso muy recordado. En represalia por un ataque de la MNF a un convoy del ejército indio, los aldeanos fueron agrupados y sus casas incendiadas por el ejército; dos mujeres, hijas de destacados

líderes de la comunidad, fueron retenidas por separado en una cabaña donde los soldados se turnaron para violarlas. Toda la comunidad mizo, y las mujeres en particular, sufrieron en silencio, ya que no había ninguna institución en la que las víctimas pudieran buscar justicia o reparación. Fueron estos crímenes y violaciones los que llevaron a varios grupos de mujeres a unirse para formar la poderosa Mizo Hmeichhia Insuihkhawm Pawl (MHIP) que se comprometió a trabajar y luchar por los derechos colectivos de las mujeres mizo.

Los orígenes del conflicto en el estado de Assam se remontan a 1978, con un movimiento estudiantil de masas que desembocó en una resistencia armada contra lo que percibía como terror estatal y explotación económica, y que en 1979 formó el Frente Unido de Liberación de Assam o ULFA2, una organización política autoproclamada revolucionaria y comprometida con la lucha por la liberación. La violencia del ULFA ha sido igualada del mismo modo por la violencia y la agresión del Estado indio. En un claro mensaje de superioridad de fuerza, las “operaciones de peinado y búsqueda” de las fuerzas de seguridad fueron acompañadas en la mayoría de los casos de violencia sexual, intimidación extrema y saqueo. Casi todos los casos denunciados se produjeron en zonas rurales alejadas del Estado, en las periferias de la periferia. Las entrevistas con excombatientes muestran que muchas mujeres que sólo estaban involucradas de forma marginal con el ULFA se convirtieron en miembros de pleno derecho después de las atrocidades sufridas o por miedo a sufrirlas (Goswami, 2015). El ULFA se ha desmarcado del llamamiento a la paz en diferentes momentos, especialmente con la formación de un Grupo Consultivo Popular (PCG) en 2005. La eminente escritora feminista, la difunta Dra. Mamoni Raisom Goswami, desempeñó un papel fundamental a la hora de influir en el ULFA hacia las negociaciones de paz. El PCG celebró tres

rondas de diálogo con el gobierno durante un año, pero el proceso fracasó. Finalmente, las negociaciones de paz tomaron un rumbo más definitivo en 2009 tras las detenciones de altos dirigentes del ULFA y facilitadas en gran medida por eminentes ciudadanos de Assam.³ A pesar de la oposición a las conversaciones de paz por parte de un sector del ULFA, las negociaciones de paz que comenzaron en mayo de 2010, con una mujer en el equipo del ULFA, han seguido su curso.

El “otro” periférico y la violencia sexual

A pesar de la creciente atención internacional, en las “periferias” de la India, la violencia sexual por parte de las fuerzas de seguridad continúa con absoluta impunidad. Se ha desplegado en la región del noreste para establecer el dominio y la supremacía del Estado-nación, para torturar y humillar al pueblo hasta la sumisión, así como para castigar a los grupos que desafían la idea de un Estado-nación indio homogéneo y unificado.

La violencia sexual tiene un efecto grave y corrosivo en la sociedad, intimidando y aterrorizando no sólo a la víctima, sino también a las familias y a comunidades enteras. Consigue denigrar y destruir a las comunidades a las que se dirige porque las estructuras sociales y culturales están profundamente entrelazadas con las ideas construidas sobre el género y las nociones de pureza/impureza de la mujer o de que es propiedad del varón. En los contextos de conflicto, se trata esencialmente de una afirmación de poder y superioridad, basada en una compleja red de preconceptos socioculturales de género e impulsada políticamente, y en muchos casos, en los tres contextos citados, “de hacer del castigo un espectáculo” (Foucault, 1995).

Para los hombres de las comunidades tribales del noreste de la India, profundamente vinculados a las costumbres culturales

y sociales de la tradición y las prácticas consuetudinarias, la violencia sexual contra las mujeres de sus comunidades es la máxima humillación y la destrucción de su preciada masculinidad.

“La violencia sexual tiene un efecto grave y corrosivo en la sociedad, intimidando y aterrorizando no sólo a la víctima, sino también a las familias y a comunidades enteras.”

Sin embargo, las fuerzas armadas indias no son las únicas que ejercen la violencia sexual; se han producido violaciones masivas de mujeres en pueblos remotos de la periferia por parte de grupos militantes para establecer la supremacía sobre un rival o para dar una lección a todo un pueblo. El prolongado proceso de paz y los tiempos de paz entre los nagas, por ejemplo, han creado círculos concéntricos de periferia y en ese “otro periférico” las mujeres siguen siendo el otro más vulnerable.

En las conversaciones de paz en curso entre los líderes del ULFA y el Gobierno indio hay una cláusula sobre los miembros desaparecidos del grupo, pero ninguna para las supervivientes de la violencia sexual. En las entrevistas realizadas a las mujeres del ULFA, queda claro que, en el caso de las combatientes, la condición de víctimas está estrechamente relacionada con las nociones de agencia y justicia y, por lo tanto, debe entenderse y abordarse teniendo en cuenta esta complejidad. Sin embargo, el nivel de brutalidad que experimentaron también revela una justificación más profunda, insidiosa y misógina: la de dar una lección a una mujer que ha transgredido las normas sociales al elegir asociarse con un grupo militante (Goswami, 2017).

La violencia sexual en el noreste de la India se ha visto especialmente facilitada debido al funcionamiento de la Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas de 1958 (AFSPA), que se utilizó por primera vez en 1960 para frenar la lucha naga como medida temporal, pero que ha permanecido en funcionamiento en diferentes partes de la región durante más de seis décadas. Esto ha creado un régimen legal que ha generado impunidad para las fuerzas armadas, permitiéndoles el uso de cualquier estrategia o táctica sin las limitaciones de los principios legales o las garantías constitucionales. Se ha seguido abogando firmemente por su derogación, incluso desde organismos internacionales de derechos humanos como el Comité de la CEDAW (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer).

El continuo de la violencia y la búsqueda de justicia de las mujeres

Cada vez se reconoce más que para garantizar la justicia, especialmente en las transiciones posteriores a los conflictos, las personas afectadas deben tener acceso a los procedimientos políticos y voz en las decisiones que afectan sus vidas. Sin embargo, la justicia de género es la primera que se negocia en aras de la moralidad o de la conveniencia política y económica. Esto se ve facilitado por el hecho de que las mujeres no son percibidas como individuos, sino como la valiosa propiedad de una familia o las portadoras de la identidad cultural de una comunidad.

Los acuerdos de paz protegen las prácticas consuetudinarias discriminatorias

Una premisa importante de las negociaciones de paz de los naga y los mizo ha sido el compromiso de respetar y proteger las

prácticas consuetudinarias, muchas de las cuales son el origen de profundas desigualdades estructurales, ya que sostienen relaciones de poder desiguales en función del género. Entre otras cosas, las leyes consuetudinarias de estas dos comunidades altamente patriarcales niegan a las mujeres los derechos a la tierra y a la herencia y un papel en la toma de decisiones. Podría decirse que encarnan lo que Galtung denomina violencia cultural, ya que se citan para justificar o legitimar la violencia estructural y negar a las mujeres su condición de persona. Las mujeres de Mizo, bajo la égida del MHIP, han tenido que librar una larga y dura batalla por los derechos de herencia y el derecho a la participación política, que se ha saldado con cierto grado de victoria. La Asamblea de Nagaland aprobó inicialmente la Ley Municipal de Nagaland (Primera Enmienda) en 2006, que preveía la reserva del 33% de los escaños para las mujeres en los organismos locales urbanos, pero el Gobierno, presionado por los hombres de las tribus, recurrió a las disposiciones constitucionales especiales del artículo 371 (A) y aprobó una resolución que afirmaba que la reserva para las mujeres entraría en conflicto con el derecho consuetudinario. El Tribunal Superior confirmó la posición del gobierno del estado y la Asociación de Madres Naga (NMA) recurrió al Tribunal Supremo, donde está pendiente una orden final.

Una justicia basada en la igualdad

Los contextos de conflicto en el noreste de la India ilustran claramente cómo las complejidades de la justicia, las desigualdades y las transiciones son especialmente intrincadas cuando se trata de género. ¿Cómo imaginan las mujeres la justicia, cómo negocian y maniobran sus múltiples y a menudo conflictivas identidades y cómo equilibran la justicia con los compromisos sociales y políticos en comunidades implicadas

en luchas armadas prolongadas y en la resistencia? Está claro que la justicia que las mujeres naga imaginan para la violencia sexual implicaría un reconocimiento de la personalidad de las mujeres y una justicia basada en nociones de igualdad, no a través de la lente patriarcal de la protección de la propiedad y el cuerpo de las mujeres.

Basándose en el análisis de Galtung (1969) y Farmer et al. (2006) y aplicándolo a las transiciones, Mathew Evans explica que la injusticia social y la violencia estructural son, de hecho, sinónimos y denotan una condición en la que se produce la violencia; no sólo por las acciones directas de individuos concretos contra otros, sino más bien por los acuerdos sociales estructurales incrustados en la organización política y económica del mundo social, que constriñen la capacidad de acción de sus víctimas y causan daños de naturaleza profunda. En el caso de las mujeres naga y mizo, los acuerdos sociales de sus respectivas comunidades están arraigados en las leyes y prácticas consuetudinarias estructuradas que han restringido su capacidad de acción como miembros de pleno derecho de sus comunidades. Así que, aunque la justicia para la violencia sexual es importante, en un momento de transición política reconocer y corregir esta discriminación sistémica y arraigada es un paso esencial para aplicar las garantías de no discriminación e igualdad de género.

Economía política de la justicia de género: Un enfoque transformador

Los sistemas de guerras y conflictos armados no sólo exacerban las desigualdades estructurales y las vulnerabilidades existentes, sino que también tienen consecuencias de gran alcance para los derechos humanos de las mujeres. Por lo tanto, abordar el impacto de la violencia

sobre las mujeres exclusivamente a través de la perspectiva de la violencia sexual directa es insuficiente. Un enfoque emergente que está estrechamente vinculado a las realidades, necesidades y expectativas sobre el terreno en un período de posconflicto es el de la justicia transformadora, que implica un “cambio de enfoque de lo legal a lo social y político, y del Estado y las instituciones a las comunidades y las preocupaciones cotidianas” (Gready y Robins, 2014). Por lo tanto, la justicia transformadora, en particular en un contexto post-conflicto, es de especial importancia para las mujeres y otras comunidades marginadas, ya que en su esencia implica un proceso de transformación de jerarquías opresivas y estructuras sociales discriminatorias y de la posibilidad de una paz positiva.

“Y como tal, la lucha de las mujeres naga por los lugares reservados a las mujeres y el derecho a la toma de decisiones políticas en esta coyuntura de la historia naga es de suma importancia.”

Como la mayoría de los procesos de paz conocidos y bien documentados, los de la región se caracterizan por ser transacciones descendentes, dirigidas por hombres y esencialmente impulsadas por el poder. En ninguna parte es esto más evidente que en el contexto naga. La realidad de los tres contextos del noreste de la India subraya la necesidad de salir de este modo de transacción patriarcal y aspirar a algo que sea verdaderamente transformador. Esto implicaría necesariamente centrarse en las necesidades y prioridades locales, garantizando que se escuchen las voces de los marginados, que se mejore la participación y la apropiación, que se dé prioridad al proceso y a los resultados, y que se cuestionen las dinámicas de poder desiguales e

interrelacionadas. Y como tal, la lucha de las mujeres naga por los lugares reservados a las mujeres y el derecho a la toma de decisiones políticas en esta coyuntura de la historia naga es de suma importancia.

Los argumentos de Gready coinciden con el discurso feminista de que hacer una distinción entre lo privado y lo público despolitiza lo doméstico. Esto ha conducido a la marginación e invisibilidad de la violencia cotidiana perpetrada contra las mujeres, especialmente la que se produce en las familias y comunidades, que tiene sus raíces en causas estructurales. Si bien los procesos judiciales son importantes, reducen a las mujeres a su daño en una violación y se centran en el responsable, en lugar de discutir las relaciones de poder de género que conducen a las violaciones. La denegación de una serie de derechos a las mujeres en virtud del derecho consuetudinario naga y mizo es una manifestación de las relaciones de poder basadas en el género. Gready sostiene que, al reconocer explícitamente y tratar de desafiar las desigualdades vinculadas al poder y la jerarquía, y al argumentar que los derechos humanos se definen por la lucha y nacen de las experiencias de privación y opresión, los derechos se plantean en términos explícitamente transformativos (2014). Un enfoque de justicia transformadora requiere cambiar todo lo que refuerza las jerarquías de poder sociales y económicas existentes, incluyendo a las comunidades afectadas como agentes en la configuración de la agenda de políticas y prácticas, y centrándose en abordar las injusticias socioeconómicas y las raíces estructurales de las injusticias actuales. Este es el cambio que puede eliminar los estereotipos de la periferia y la “otredad” discriminatoria de los pueblos y de los individuos. ■

■ Bibliografía

Evans, M. (2016). "Structural Violence, Socioeconomic Rights, and Transformative Justice", *Journal of Human Rights*, 15, 1-20, D01.

Farmer, P. E., Nizeye, B., Stulac, S., and Keshavjee, S. (2006). "Structural violence and clinical medicine", *PLoS Medicine*, 3(10), 1686–1691.

Foucault, M. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Translated by A. Sheridan. New York: Penguin Random House.

Galtung, J. (1969). "Violence, peace, and peace research", *Journal of Peace Research*, 6(3), 167–191.

Goswami, R. (2015). *Of Revolution, Liberation and Agency: Aspirations and Realities in the Lives of Women Combatants and Key Women Members of the United Liberation Front of Assam (ULFA)*, Heinrich Boll Stiftung, New Delhi.

Goswami, Roshmi (2017). "The Price of "Revolution": Who determines?"

Gready, P. and Robins, S. (2014). "From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice", *The International Journal of Transitional Justice*, Vol. 8, 2014, 339–361, doi:10.1093/ijtj/iju013T.

■ Notas

1 - En julio de 1997, la Iglesia Bautista organizó la reunión de paz de Atlanta, en la que los dirigentes del NSCN aceptaron iniciativas para comenzar un proceso de diálogo incondicional.

2 - Según el Gobierno de la India, el ULFA está clasificado como organización terrorista prohibida por la Ley de Actividades Ilegales (Prevención) de 1990. En la actualidad, el gobierno indio ha iniciado ofensivas militares contra el ULFA, denominadas Operación Bajrang en noviembre de 1990, Operación Rhino en septiembre de 1991, Operación All Clear en diciembre de 2003 y Operación Rhino 2, dirigidas por el ejército indio. Las operaciones de lucha contra la insurgencia aún continúan en la actualidad bajo la Estructura de Mando Unificado.

3 - El Dr. Hiren Gohain, eminente intelectual, formó una convención a nivel estatal, "Sanmilita Jati-ya Abhivartan", que pidió a Nueva Delhi y al ULFA que se presentaran a la mesa de negociación sin ninguna condición previa ni retraso.

4 - Nagaland es el único estado del país que nunca ha tenido una mujer MLA. Mientras que cada pueblo y tribu tiene su propia rama femenina, no hay mujeres en el consejo del pueblo y el órgano supremo de toma de decisiones de las tribus naga, el Naga Hoho, tampoco tiene representantes femeninas.

Reimaginar la subversión: Acción y activismo de paz de las mujeres en el norte de Uganda

por Yaliwe Clarke y Constance O'Brien



A partir de los datos obtenidos en dieciséis entrevistas en profundidad y nueve grupos focales con personas que participaron en organizaciones comunitarias de paz entre 1998 y 2015, este artículo pone de relieve las complejidades que sustentan las iniciativas de paz de las mujeres en el norte de Uganda. Demuestra que las mujeres han mostrado un sentido de acción y resistencia en sus esfuerzos por establecer grupos y organizaciones de apoyo comunitario que abordan el impacto socioeconómico y psicológico de la guerra, con muy pocos recursos a su disposición. También se cuestiona hasta qué punto las mujeres activistas por la paz abordaron la violencia estructural y subvirtieron el patriarcado dentro de un marco liberal existente de construcción de la paz.¹

La política del colonialismo, la etnia y el militarismo en Uganda

Desde la independencia en 1962, Uganda ha experimentado una paz disputada (en el centro de Uganda y en algunas partes del sur del país) junto con un conflicto armado en el Nilo Occidental, los distritos norteños de Gulu y Kitgum y algunas partes del distrito de Apac. Las raíces de la guerra se remontan a principios del siglo XX, cuando la administración colonial británica enfrentó a las etnias dominantes del norte con las del sur, y dio a un grupo étnico influencia política y económica sobre otras comunidades étnicas y reinos. Amone y Muura (2014) afirman que hubo una importante inversión en educación e infraestructuras en el sur de Uganda, considerado la zona productiva, y poca o ninguna inversión

Table 1: Women's Peace Organisations: interviews and focus groups' informants

Organisation	Locality	Year Est.	Individual Interviews-key informants	Focus Groups FGs	Number of informants per Organisation
Women's Peace Initiative - Uganda (WOPI)	Lira	2003	3 founder members 1 Staff member	2 focus groups consisting of 39 beneficiaries	43
Women's Advocacy Network (WAN)	Gulu	2011	1 Founder member who was also a staff member	1 focus group consisting of 9 beneficiaries	10
People Voice for Peace (PVP)	Gulu	1995	1 founder member	None	1
Kitgum Women's Peace Initiative (KIWEPI)	Kitgum	1999	2 founder members 4 staff members	6 focus groups consisting of 29 beneficiaries	35
Kitgum Concerned Women's Association (KICWA)	Kitgum	1998	1 Founder member 2 staff members	None	3
Live Again	Kitgum	2006	1 Founder member who is also a staff member	None	1
Total number			16 individual interviews 9 FGs		93 informants

Fuente: Yaliwe Clarke, *Investigación de doctorado en curso*, 2017.

de este tipo en el norte de Uganda, considerado la zona laboral. Esto estimuló un flujo de mano de obra migrante desde las zonas del norte de Uganda, especialmente Kitgum, Gulu, Lira y partes del Nilo Occidental, hacia la región central. Estos trabajadores migrantes fueron vigilados de cerca para que no se perdiera su origen tribal, y, una vez finalizado su trabajo, debían regresar a su "tribu". Así, el norte se convirtió en poco más que una reserva para la mano de obra migrante y el reclutamiento militar en una forma de gobierno etnicista.

En el momento de la independencia, los británicos entregaron el país a una sociedad políticamente dividida en la que el rey de Baganda, que representaba a las comunidades del sur, formó una débil alianza con Milton Obote, alineado políticamente con las comunidades del norte. En 1966, Obote rompió esta alianza y asumió la autoridad política de todo el país, apoyándose en gran medida en el ejército estatal, en el que un comandante, Idi Amin, ejercía la influencia política. Con la toma de posesión militar de Amin en 1971, todos los ministros prestaron

juramento en el ejército como oficiales cadetes y el militarismo se institucionalizó aún más. Con esta creciente militarización del Estado creció una nueva "clase" socioeconómica de hombres militares y sus compañeras mujeres. Debido a las prácticas de reclutamiento coloniales anteriores, la mayoría de los soldados pertenecían a comunidades étnicas del norte, procedentes del Nilo Occidental, y eran conocidos como "nubios". Los que no formaban parte de esta clase luchaban al margen de una economía política militarizada. Con la toma del poder estatal por parte del Movimiento de Resistencia Nacional de Yoweri Museveni en 1986, el poder político se trasladó de nuevo al sur. Durante 20 años, de 1986 a 2006, la región de Acholi sufrió una guerra con los subsiguientes grupos rebeldes, sobre todo el Ejército de Resistencia de los Loes (LRA), que se alzaron en armas contra el gobierno y atacaron a la población civil. Al mismo tiempo, las tropas gubernamentales eran culpables de graves violaciones de los derechos humanos. Se calcula que más de dos millones de acholis vivían en campos de desplazados internos durante varios años de conflicto.

La micropolítica de los esfuerzos de construcción de la paz de las mujeres de Uganda

Según Mulumba (2002: 113-4) “La participación de las mujeres en los esfuerzos de paz en la historia más reciente de Uganda se remonta a 1985, cuando Tito Okello tomó el poder en un golpe de estado. En ese momento, el Consejo Nacional de Mujeres organizó a más de 2.000 mujeres para que se manifestaran en las calles de Kampala a favor de la paz y contra el maltrato de las mujeres por parte de los militares”. El activismo de las mujeres en torno a cuestiones de derechos legales, paz, educación y salud reproductiva, planes de crédito, mujeres discapacitadas y derechos sobre la tierra se estableció y creció exponencialmente después de que el Movimiento de Resistencia Nacional tomara el poder en 1986. Mujeres como Betty Bigombe, ex ministra de Estado a cargo del Programa de Reconstrucción del Norte de Uganda, emprendió iniciativas para poner fin a las hostilidades ya en 1995. Se adentró en el monte para mantener conversaciones cara a cara sobre la paz con el líder del LRA, Joseph Kony, y en diciembre de 2004 medió en las conversaciones entre el Gobierno y los rebeldes del LRA.

En 2006 se inició un proceso formal de negociación de paz² dirigido por el gobierno para abordar el conflicto en el norte de Uganda. Las conversaciones de paz entre el Gobierno de Uganda (GoU) y el Ejército de Resistencia de los Loes (LRA) tuvieron lugar en Juba, Sudán del Sur, con el apoyo del Gobierno de Sudán del Sur (GOSS).

El equipo de negociación del gobierno de 2008 estaba formado únicamente por hombres, con una o dos mujeres parlamentarias que actuaban como observadoras. Sólo había dos representantes femeninas del LRA que tuvieron un papel limitado en el proceso de negociación. Ante esta escasa representación, las organizaciones de mujeres formaron una coalición con el objetivo de garantizar que las perspectivas y demandas de las mujeres se tuvieran en cuenta durante las conversaciones. Este proceso se denominó

“Caravana de la Paz de Juba”. Según Musoke (2012: 12) “Con más de 100 mujeres activistas al inicio del viaje, la caravana tenía como objetivo sensibilizar y movilizar a los ugandeses para que apoyaran el proceso de paz y reforzaran la solidaridad con las comunidades del norte de Uganda devastadas por la guerra”. Se formaron otros grupos de mujeres como respuesta a las necesidades inmediatas de subsistencia provocadas por el conflicto armado. Por ejemplo, en respuesta al aumento de viudas y huérfanos, la Asociación Nacional de Organizaciones de Mujeres de Uganda (NAWOU) puso en marcha un centro de atención a la infancia y colaboró en el reasentamiento de mujeres ex prisioneras de guerra. El Esfuerzo de las Mujeres de Uganda para Salvar a los Huérfanos (UWESO) también trató de responder a las necesidades de los niños huérfanos por la guerra.

Este artículo se basa en un estudio que examinó el trabajo de seis organizaciones comunitarias de mujeres por la paz en el norte de Uganda. Los resultados revelan cuatro temas que se derivan de la experiencia de los participantes en la investigación sobre la guerra y los esfuerzos que realizaron por la construcción de la paz: los cambios en el patriarcado como resultado del secuestro, el desplazamiento y la erosión de las estructuras familiares, la guerra como una oportunidad para la acción de las mujeres y la subversión del patriarcado, la subversión de las economías del patriarcado a través de los microcréditos y la tierra, la acción de las mujeres en la resocialización de la masculinidad.

Cambios en el patriarcado: Secuestro, desplazamiento y erosión de las estructuras familiares

Una combinación de altos niveles de reclutamiento forzoso de hombres por parte de las fuerzas combatientes, la violación y el matrimonio forzoso de niñas y mujeres, el saqueo de ganado y otras propiedades, los desplazamientos masivos, la violencia y la pérdida de medios de vida contribuyeron a desestabilizar

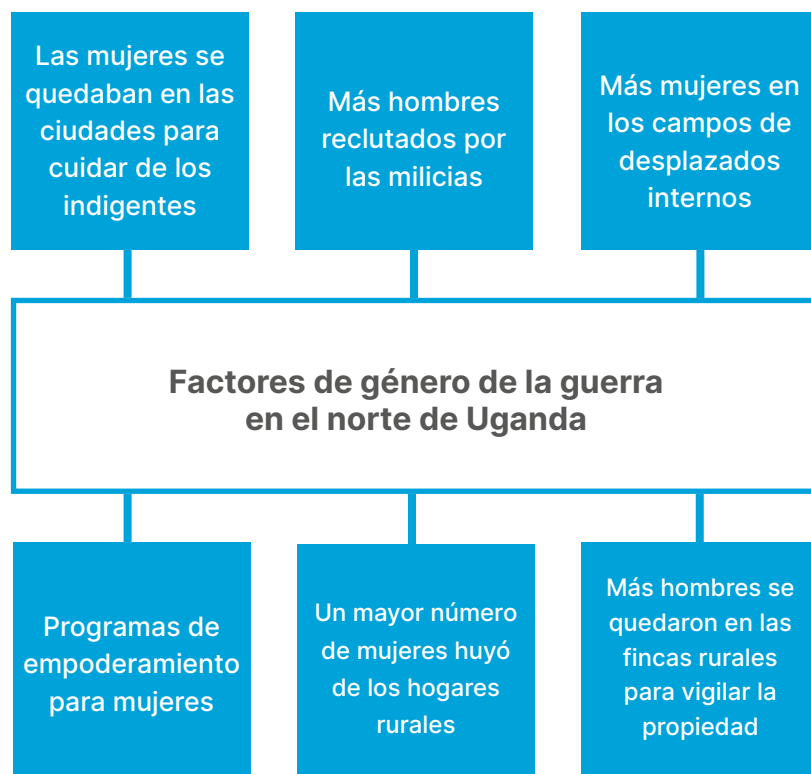


Diagrama 1: Flujo de género - Desplazamiento de hombres y mujeres

los roles y las identidades masculinas y el dominio (heteronormativo) de los hombres sobre la estabilidad social y material entre las sociedades acholi y langi³.

La propiedad y el control de la tierra eran fundamentales para el poder de los hombres, asociados a su papel de padres, tíos y ancianos de los clanes patrilineales. Por ello, muchos hombres se quedaron en las zonas rurales en un intento de cumplir su papel de protectores de la tierra y la propiedad, mientras que las mujeres se trasladaron a las ciudades con sus hijos en busca de protección. La autoridad masculina también se vio socavada a mediados de la década de 1990, cuando el ejército ugandés obligó a unos dos millones de personas de la zona rural de Acholilandia a instalarse en “aldeas protegidas”, es decir, en campos de desplazados internos. Sin tierras que cultivar ni ganado que pastorear, la mayoría de los hombres recurrieron al consumo excesivo de alcohol y al juego.

Las investigaciones sobre las tasas de suicidio entre los hombres de estos campos de desplazados internos en el norte de Uganda (Kizza et. al.

2012) revelaron que la mayoría de los casos de suicidio eran el resultado de la sensación de pérdida de dignidad y valor social de los hombres. Su autoestima se vio aún más afectada cuando se dieron cuenta de que sus esposas e hijas vendían sexo para sobrevivir. Algunos se vieron obligados a presenciar cómo sus mujeres e hijas eran violadas por los soldados del gobierno o por el LRA; otros se sintieron aún más humillados cuando ellos mismos fueron violados por los soldados del gobierno. El siguiente diagrama ilustra el desplazamiento de hombres y mujeres como resultado de la guerra en el norte de Uganda. Los efectos subsiguientes del secuestro y la erosión de las estructuras familiares movilizaron a las mujeres hacia los esfuerzos colectivos de paz.

¿La guerra creó una oportunidad para la actuación de las mujeres y la subversión del patriarcado?

Los resultados de este estudio indican que hubo una ligera expansión del poder de las mujeres, en gran parte debido a que la guerra

transformó radicalmente las condiciones sociales que conformaban las normas de género, predominantemente entre las comunidades acholi y langi. La viudez, el matrimonio forzado y el aumento del número de niños huérfanos hicieron que las mujeres experimentaran de repente una ampliación de sus responsabilidades materiales y maternas, aumentando inadvertidamente su esfera de influencia en el clan. Esta expansión del poder material, a diferencia del discursivo, se produjo dentro y fuera del linaje de sus padres o maridos. Se amplió el poder, antes implícito, de las mujeres mayores como madres, tías y cuñadas o adivinas.

Las mujeres y las niñas secuestradas o separadas de sus familias durante varios años se vieron obligadas a casarse con miembros de las milicias, cuyos hijos nacieron de una violación.

Los niños nacidos en cautiverio se enfrentaron a varios problemas: los que perdieron el contacto con sus padres biológicos o fueron rechazados por sus padrastros fueron acogidos por el clan paterno de su madre; los que se separaron de sus familias o fueron rechazados por el clan paterno de su madre acabaron siendo mantenidos por otras mujeres. Todas las mujeres que fundaron organizaciones comunitarias por la paz se refirieron a la necesidad urgente de ayudar a un gran número de niños indigentes en sus familias y en las comunidades en las que vivían. Por ejemplo, en el punto álgido de la guerra en 2003, una mujer que más tarde fundó un grupo de paz comunitario de mujeres, acogió hasta 36 personas en su casa. Formó el grupo de paz para que ella y otras mujeres pudieran reunir esfuerzos colectivos para ayudar a ese gran número de personas que cuidaban.

Así, muchas mujeres sustituyeron el anterior papel materialmente dominante de los hombres como proveedores y protectores de la familia. Al cuidar de los niños huérfanos, de los nietos y de los hijos de otros miembros de la familia extensa (hermanos, hermanas, tías, tíos), su función maternal se amplió en una época en la

que los recursos socioeconómicos disponibles eran mínimos. Además, el caos cotidiano de los campamentos de desplazados internos hacinados provocó una inevitable mezcla de clanes y subclanes en un espacio reducido, lo que dio lugar a cambios en los lazos patrilineales, así como a una pérdida general de control social.

Un grupo de mujeres especialmente vulnerable fue el de aquellas que fueron secuestradas para convertirse en “esposas” de hombres del LRA y que regresaron con hijos nacidos durante el cautiverio. Según Annan et. al. (2011: 883), hasta el veintiséis por ciento de las jóvenes de entre catorce y treinta y cinco años fueron secuestradas durante la guerra. De hecho, la economía de guerra se basó en los secuestros para reproducir, tanto literal como figurativamente, niños soldados para los grupos de milicianos. En consecuencia, los lazos de parentesco se diluyeron y alteraron. De las seis organizaciones incluidas en el estudio, la Red de Defensa de las Mujeres (WAN), creada en 2011, fue fundada únicamente por mujeres que habían sido secuestradas.

Cuando estas mujeres regresaron del “monte”, tuvieron que soportar el trauma adicional de ser estigmatizadas, condenadas al ostracismo y sometidas a la violencia de sus propias familias y de la comunidad en general.

“Recuerdo que antes de que empezara la WAN, la vida era muy difícil porque la gente no nos quería en la comunidad. En primer lugar, si volvías del monte la gente pensaba que eras tú quien había cometido los crímenes del LRA. La gente de la comunidad nos culpaba a nosotras de todos los crímenes que cometía el LRA”. (Grupo de discusión 1, fundador, WAN, diciembre de 2013)
“A los niños con los que volvimos no se les permitía jugar con otros niños. Si los niños se peleaban cuando jugaban decían que el cen [venganza fantasmal] de sus padres los molestaba y por eso pegaban a otros niños. ... Me ponía muy triste cuando insultaban al niño y, por otro lado, miraba el problema por el que estaba pasando. Estaba enferma y no podía hacer nada. Era doloroso”.

(Grupo focal Discusión 8, fundadora, Women's Advocacy Network, Gulu, diciembre de 2013)

La capacidad de las mujeres para fundar grupos de paz en medio de semejante estigma, violencia y flujo social revela su capacidad de resistencia a la hora de elaborar opciones individuales y colectivas para ellas y las comunidades que las rodean. Las mujeres asumieron nuevas posiciones sociales que impugnaron el poder de los hombres y cambiaron ciertas construcciones patriarcales de la feminidad. La subversión del patriarcado se produjo en la capacidad de las mujeres de proveer el bienestar material de sus familias y de la comunidad en general.

Subvertir las economías del patriarcado: Microcréditos y tierra

Una forma destacada en que las mujeres pudieron apoyar a las comunidades fue a través de planes de microcréditos y actividades de generación de ingresos a pequeña escala. En las primeras etapas de formación de los grupos de paz, los esfuerzos de construcción de la paz comenzaron con la recolección de alimentos de amigos y familiares. Más tarde, se adoptaron enfoques más institucionalizados, como la creación de pequeñas empresas tales como la elaboración de jugos, la sastrería, el comercio de alimentos, la cría de animales, la elaboración de vino, el cultivo de setas y la apicultura. Algunos de estos negocios se convirtieron posteriormente en planes de ahorro o microfinanciación/crédito que permitían a las mujeres trabajar en grupo, ahorrar colectivamente y compartir los riesgos financieros.

Varias organizaciones de Kitgum, como KI- WEPI, KICWA y otras que no eran fundamentales para el estudio, combinaron los proyectos de generación de ingresos con planes de ahorro, a menudo denominados "Asociaciones de Ahorro y Préstamo de Aldea" (VS-LA), financiados y coordinados en su mayoría por CARE International. Hasta 2013, CARE había ayudado a facilitar la creación

de 27.222 grupos de VSLA en las zonas rurales de Uganda, que representaban a más de medio millón de personas. El informe afirma que se han ahorrado hasta cincuenta y dos mil millones de chelines ugandeses, unos diecinueve millones de dólares (Lowicki-Zucca et. al, 2014).

Las mujeres describieron la ampliación de su capacidad para atender a las personas de su entorno como una contribución a la paz, y explicaron que los beneficios de estas iniciativas eran evidentes en los cambios de su posicionamiento social. Mejoraron su capacidad para cuidar de sus familias y para hacer frente al trauma del desplazamiento, así como a otros impactos psicosociales. Su participación en estos colectivos de paz cambió su estatus de forma positiva tanto social como económicamente.

En general, parece que los proyectos de generación de ingresos y los planes de ahorro alimentaron las formas locales de asociación. Es difícil evaluar hasta qué punto fomentaron la vida asociativa que reconocía y transformaba la opresión a través de la conciencia colectiva y la resistencia. Amina Mama (2014:37-8) se muestra bastante escéptica en cuanto a que las mujeres que viven en contextos de guerra o tras la guerra puedan realmente abordar las raíces estructurales más amplias de la opresión, aunque este estudio da crédito al hecho de que se han producido algunos cambios. Los intentos de planes de microcréditos proporcionaron un medio de vida esencial para su supervivencia.

En cuanto a la tierra, a las mujeres se les sigue negando el acceso y la propiedad. Por lo general, no heredan la tierra de sus padres, ya que cuando se casan adoptan los nombres de los clanes de sus maridos. En la subregión de Acholi, las adquisiciones de tierras son especialmente delicadas, ya que se producen tras el prolongado desplazamiento de la mayoría de la población y la consiguiente confusión sobre los límites. Su reasentamiento se ha complicado aún más por las especulaciones sobre la presencia de petróleo (Sjögren, 2014).

En este estudio, la propiedad de la tierra siguió siendo un problema importante para las mujeres incluso durante el contexto posterior al conflicto.

“En cuanto a la tierra, a las mujeres se les sigue negando el acceso y la propiedad. Por lo general, no heredan la tierra de sus padres, ya que cuando se casan adoptan los nombres de los clanes de sus maridos.”

Las mujeres secuestradas tuvieron grandes dificultades para reintegrarse en la comunidad, ya que no se les asignaron tierras, y las madres de niños que no conocían o no podían averiguar el clan del padre de su hijo no podían heredar tierras. Como explicó un miembro del personal que trabaja para una ONG nacional de derechos legales de las mujeres, estos niños tampoco se integraban fácilmente en los clanes de sus padres:

“En el momento en que abrimos la oficina, a las mujeres se les negaba generalmente la tierra. Viudas, solteras, casadas. Oímos que muchas mujeres eran expulsadas de sus tierras... porque se quedaban en los campamentos y no sabían de dónde venían sus maridos. Cuando abrimos la oficina, había muchas mujeres que decían ‘estoy buscando o me han dicho que mi marido viene de esta zona’. Y ‘he ido allí y nadie me da la tierra’. Eso se convierte en un problema porque, por un lado, te has casado, probablemente te casaste dentro del campamento. No sabes de dónde viene este hombre, por lo que tenemos problemas de demarcación. Te casaste con el hombre, murió, fue enterrado en el campamento, así que ahora intentas rastrear sus raíces”. (Informante clave M, personal de FIDA, febrero de 2015).

Una de las encuestadas, miembro del personal de Isis-WICCE (una organización de mujeres con sede en Kampala) que ha trabajado con muchos grupos

de mujeres por la paz en el norte de Uganda, expone la posibilidad imaginada de transferir la propiedad de la tierra a las mujeres:

“Para empezar con los niños que nacieron en cautiverio es necesario un cambio, también hay que permitir que las madres tengan la propiedad, que sean consideradas como partes interesadas valiosas de la tierra y como madres valiosas y, por lo tanto, puedan realmente transmitir su clan a sus hijos y eso es realmente fundamental en África. Así que el patriarcado está vivo y coleando, por lo que es necesario un cambio en el que la gente diga: “vamos a crear algunas excepciones” y tener a estos niños que han nacido probablemente de una violación y de un secuestro y no son niños que hayan elegido nacer así y a las madres les habría encantado tener un clan y la realidad es que no saben quién es el padre”. (Informante clave V, ex codirector de Isis-WICCE, febrero de 2015).

El estudio encontró que con la desestabilización del dominio masculino, se abrieron espacios de poder parcial para las mujeres en la forma en que se reconfiguraron las estructuras familiares. Por lo tanto, la tensión entre la acción y la estructura es evidente; la acción se ve constantemente subvertida por las realidades estructurales que pueden dar la impresión de cambiar a nivel superficial, pero que permanecen profundamente inamovibles y arraigadas en otros niveles. Así, parece que las intratables normas patriarcales relativas a la tierra siguen siendo innegociables. Las mujeres, sin embargo, hicieron varios intentos de lidiar con los nuevos posibles roles masculinos.

La acción de las mujeres en la resocialización de las masculinidades

Cuando se les preguntó por los vínculos entre la igualdad de género y la paz, las fundadoras de las organizaciones de mujeres manifestaron ser conscientes de las opresiones patriarcales (estructurales) y culturales más allá de las que

la guerra reforzó o (re)creó. Algunas activistas sostienen que las raíces de la violencia en la comunidad están vinculadas a las costumbres de los Acholi sobre la masculinidad durante y después de la guerra. En este sentido, dos grupos, Kitgum Women's Peace Initiative y Women's Peace Initiative-Uganda, establecieron proyectos destinados a cambiar las masculinidades en la esfera doméstica mediante la creación de proyectos sólo para hombres que valoraban a los hombres que desempeñaban masculinidades "pacíficas". La interpretación de KIWEPI de las masculinidades "pacíficas" incluía cinco temas: hombres que no eran violentos en el hogar; hombres que no abusaban del alcohol, hombres que apoyaban económicamente a la familia, hombres que ayudaban en las tareas domésticas, y hombres que permitían a sus esposas tomar algunas decisiones en el hogar. Se invitó a los miembros de la comunidad a votar por los hombres que demostraban estar a la altura de estos cinco temas fundamentales y se les otorgó un reconocimiento especial mediante una ceremonia de entrega de premios en la que fueron nombrados oficialmente como Lacor Makwiri - hombres modelo. Parece que los intentos de las mujeres por resocializar las masculinidades se vieron limitados o circunscritos a sus experiencias inmediatas de violencia de género y a la falta de provisiones materiales.

Otro grupo pacifista de Lira, Women's Peace Initiative Uganda (WOPI-U), puso en marcha un proyecto de concienciación comunitaria sobre la violencia de género denominado ¡SASA! Formaron a un mayor número de hombres que de mujeres utilizando una metodología que pretendía crear "...una masa crítica comprometida y capaz de crear un cambio de norma social" (Abramsky et al., 2014). Según Abramsky et al. (2014: 122) "El objetivo central de la intervención es promover un análisis crítico y un debate sobre el poder y las desigualdades de poder, no solo sobre las formas en que los hombres y las mujeres pueden hacer un mal uso del poder y las consecuencias de esto para sus relaciones íntimas y sus comunidades, sino también sobre cómo las personas pueden

utilizar su poder de forma positiva para afectar y mantener el cambio a nivel individual y comunitario". La iniciativa de SASA señala un cambio real en el comportamiento masculino violento de un miembro de la comunidad con el que trabajó el grupo de paz. El hecho de que ese cambio pueda o vaya a ser sostenido depende de una serie de factores. El proyecto SASA es bastante nuevo y no todos los informantes han participado directamente en el proyecto.

■ Conclusión

El hecho de que las mujeres de este estudio no abordaran directamente las raíces políticas y étnicas de la guerra, sino que se centraran en abordar las consecuencias económicas y psicosociales, puede haber sido un modus operandi elegido dada la situación en la que se encontraban. Optaron por adoptar los rasgos de una "economía de supervivencia" (Peterson, 2008) y operaron dentro y a veces más allá de un modo de supervivencia. Las divisiones étnicas eran una fuente importante de conflicto que no podía resolverse fácilmente; las mujeres se centraron más bien en la reconfiguración de las familias, en una renegociación marginal de las fronteras étnicas/del clan y en una refundición de las masculinidades lejos de la violencia "bélica". Un elemento central de estos reposicionamientos sociales fue la fuerte dependencia de los microproyectos de ahorro y de generación de ingresos que cubrían las necesidades materiales de las familias y de los más vulnerables de la comunidad. A pesar de estos esfuerzos radicales, la propiedad de la tierra por parte de las mujeres seguía ligada a los sistemas y costumbres patriarcales de los clanes. Por lo tanto, aunque obtuvieron algunos beneficios al ocupar espacios anteriormente masculinizados, como el de ser proveedoras materiales, se les impidió cambiar la dinámica de poder inherente a la propiedad de la tierra. Se necesitaría un análisis más profundo para mostrar las intersecciones entre el patriarcado, la economía política neoliberal de Uganda y las arraigadas divisiones étnicas entre

el norte de Uganda y el resto del país. Como dice Confortini (2010: 4), se necesita más “curiosidad feminista” sobre cómo “el patriarcado, en todas sus variadas formas, camuflado, vestido de caqui y a rayas, es una de las principales causas tanto del estallido de conflictos sociales violentos como de los frecuentes fracasos de la comunidad internacional a la hora de proporcionar soluciones a largo plazo a esos conflictos violentos”. ■

■ Bibliografía

Abramsky, T.; Devries, K.; Kiss, L.; Nakuti, J.; Kyegombe, N.; Starmann, E. & Michau, L. (2014). ‘Findings from the SASA! Study: a cluster randomized controlled trial to assess the impact of a community mobilization intervention to prevent violence against women and reduce HIV risk in Kampala, Uganda’, BMC medicine, Vol 12, No 12, 122.

Amone, C. & Muura, O. (2014). ‘British Colonialism and the Creation of Acholi Ethnic Identity in Uganda, 1894 to 1962. The Journal of Imperial and Commonwealth History’, Vol 42, No 2, 239-257.

Annan, J.; Blattman, C.; Mazurana, D. & Carlson, K. (2011). ‘Civil war, reintegration, and gender in Northern Uganda’, Journal of conflict resolution, Vol. 55, No 6, 877-908.

Confortini, C. (2010). ‘Feminist Contributions and Challenges to Peace Studies’, International Studies Association Compendium.

Hendricks, C. (2011). Gender and security in Africa: An overview. Nordiska Afrikainstitutet, Oslo.

Hudson, H. (2012). ‘A double-edged sword of peace? Reflections on the tension between representation and protection in gendering liberal peacebuilding’, International Peacekeeping, Vol 19, No 4, 443-460.

Kizza, D.; Knizek, B. L.; Kinyanda, E. & Hjelmeland, H. (2012). ‘Men in despair: a qualitative psychological autopsy study of suicide in northern Uganda’, Transcultural psychiatry, Vol 49, Issue 5, 696-717.

Lowicki-Zucca, M., Walugembe, P., Ogaba, I. & Langol, S. (2014). ‘Savings groups as a socioeconomic strategy to improve protection of moderately and critically vulnerable children in Uganda’, Children and Youth Services Review, Vol. 47, 176-181.

Mama, A. (2014). ‘Beyond survival: Militarism, equity and women’s security’, Development and Equity: An Interdisciplinary Exploration by Ten Scholars from Africa, Asia and Latin America, 29-46.

Mulumba, D. (2002). ‘The Women’s Movement and Conflict Resolution in Uganda’, in Tripp Ali Mari and J. C. Kwesiga (eds), The Women’s Movement in Uganda: History, Challenges, and Prospects, Fountain Publishers, Kampala.

Musoke, Nabukeera. H. (2012). ‘Women Making a Difference to the Juba Peace Negotiation Process’, unpublished paper, Isis-WICCE, Kampala.

Peterson, V. S. (2008). ‘New wars’ and gendered economies, Feminist Review, No 88, 7-20.

Scully, P.; McCandless, E. & Abu-Nimer, M. (2010). ‘Gender Violence and Gender Justice in Peacebuilding and Development’, Journal of Peacebuilding & Development, Vol 5, No. 3, 3-6.

Sjögren, A. (2014). ‘Scrambling for the promised land: land acquisitions and the politics of representation in post-war Acholi, northern Uganda’, African Identities, Vol 12, No 1, 62-75.

■ Notas

1 - La construcción liberal de la paz ha sido el marco político dominante de organizaciones internacionales de desarrollo como la ONU y el Banco Mundial. Ha sido criticado por las feministas (Hendricks, 2011; Hudson 2012; Scully et. al., 2010) por no abordar la violencia estructural patriarcal que está incrustada en la propia idea del Estado.

2 - El proceso de paz se refiere aquí a un proceso formal de negociación y reconciliación dirigido por el Estado, que va en paralelo a una serie de otros mecanismos para abordar el conflicto, como la Ley de Amnistía, la Corte Penal Internacional y el Mecanismo Tradicional Africano de Mato Oput. Dado que estos mecanismos son paralelos al proceso de negociación de la paz, es importante mencionarlos, ya que cada uno de ellos afecta en gran medida al progreso del otro.

3 - Aquí utilizamos la teoría de Pierre Bourdieu sobre la dominación masculina que la define como un mundo social que se presta a la objetivación que se construye enteramente en torno a una visión del mundo androcéntrica - una historia arqueológica del inconsciente masculino “...que constituye a las mujeres como objetos simbólicos cuyo ser (esse) es ser-percibido (precipi), tiene como efecto mantenerlas en un estado permanente de inseguridad corporal, o más precisamente, de dependencia simbólica”. (2001: 66)

El Prisma de la Marginación: Economía política de la violencia contra las mujeres en Sudán y Sudán del Sur

por Fahima Hashim

Las mujeres sudanesas y sursudanesas han sido objeto de muchas formas de violencia, desde la estructural hasta la física y la mental. Los factores que contribuyen a ello son la familia, las comunidades locales y el Estado. Este artículo identificará los principales factores socioeconómicos, políticos y culturales que contribuyen a la aparición y perpetuación de la violencia contra las mujeres en zonas propensas al conflicto, como Sudán del Sur y Darfur. También examinará el papel del Islam político y del Estado en la justificación y la promoción de estas formas de violencia.

Utilizando las premisas de la economía política feminista, que destaca la naturaleza masculina de la estructura de autoridad política y económica integrada (True, 2010), este artículo trazará un mapa de las diversas formas de violencia estructural a las que se enfrentan las mujeres en el Norte y en el Sur¹. Explorará las normas socioculturales, las instituciones familiares y matrimoniales patriarcales, la violencia institucional inherente a la aplicación de leyes y políticas de islamización, y la violencia en los conflictos, los desplazamientos y el racismo.

Antecedentes: El fracaso del Estado

La violencia, las guerras civiles y la inestabilidad política, agravadas por las interpretaciones dogmáticas del Islam, han asolado Sudán desde que se independizó de los británicos en 1956. Estas turbulencias son el resultado directo del Estado poscolonial que se construyó sobre

una historia de explotación colonial de los recursos de la zona en lugar de su desarrollo. Los británicos legaron el poder a un grupo de élite que procedía predominantemente de los elementos islamizados y arabizados de los grupos sociales ribereños que formularon una forma muy estrecha de identidad estatal basada exclusivamente en su interpretación del Islam y en el arabismo. Esta identidad ignoraba otros componentes sociales, culturales, religiosos y lingüísticos del país, lo que condujo a su abierta marginación y exclusión de la toma de decisiones importantes. La separación de Sudán del Sur en 2011 no fue más que uno de los resultados de la identidad estatal estrechamente definida que se aglutinó bajo el Estado centralizado por la fuerza física e ideológica. Como resultado, las mujeres de todos los ámbitos de la vida se han visto afectadas negativamente por los fracasos de la formación del Estado sudanés, especialmente bajo el gobierno actual desde 1989 hasta la fecha.

Sudán fue gobernado bajo la administración anglo-egipcia entre 1898 y 1956. A pesar de ser administrado como un solo país, los británicos siguieron políticas muy divergentes a la hora de gobernar el Norte y el Sur. Este sistema dual reforzaba el arabismo y el islam en el Norte y fomentaba el desarrollo del Sur según las líneas africanas autóctonas, mientras introducía la educación misionera cristiana y los embriones de la civilización occidental en el Sur. Para los británicos, Sudán era efectivamente dos países en uno (BAfD, 2011). Sin embargo, el factor que más preocupaba en la separación del Norte y el Sur, y que seguía afectando a la relación entre

los dos pueblos, era la concentración colonial del desarrollo económico, político y administrativo en el Norte a expensas del Sur, creando así graves discrepancias socioeconómicas y políticas entre las dos regiones (BAD, 2011). De hecho, fueron muchos los factores que afectaron a la posibilidad de construir una nación.

La situación de marginación de las mujeres sursudanesas

Las mujeres de Sudán del Sur están condicionadas por la existencia social y económica de ser uno de los países menos desarrollados del mundo devastado por décadas de conflicto (1955- 1972 y 1983-2005). Las mujeres son el 48% de la población y la mayoría de la población del país - el 72% tiene menos de treinta años. Sudán del Sur tiene una de las tasas de mortalidad materna más altas del mundo; 1 de cada 7 mujeres corre el riesgo de morir a causa del parto o del embarazo (Makuei et al., 2018). Solo el 27% de la población adulta está alfabetizada y solo el 16% de las mujeres mayores de 15 años están alfabetizadas. UNICEF estima que el 70% de los niños de 6 a 17 años nunca han sido escolarizados. Las normas y tradiciones culturales, sobre todo en las zonas rurales, marginan a las mujeres de participar públicamente o en cualquier actividad política o social (Makuei et al., 2018).

Durante el conflicto de 1983 a 2005, la violencia de género fue generalizada en Sudán del Sur, especialmente el abuso físico y mental. También hubo violaciones de mujeres y hombres. Esto ocurrió en un contexto de prácticas tradicionales que incluían la “compensación de las niñas” y la prostitución forzada/esclavitud sexual.

La violencia doméstica era una norma aceptada y los matrimonios precoces eran habituales, ya que el 45% de las niñas se casan antes de los dieciocho años y el 7% antes de los quince. La poligamia es otra norma y, tradicionalmente,

solo los hombres pueden pedir el divorcio y la familia de la esposa está obligada a devolver el precio de la novia (South Sudan Human Development Report, 2015).

La posición social de las mujeres de Sudán del Sur está determinada por las tradiciones culturales tribales. Su lugar está en el hogar como esposas y madres y su estatus se ve aún más disminuido por problemas como la falta de educación, la pobreza y los conflictos. A pesar de ello, las mujeres del Sur son una fuerza económica importante en la agricultura, la producción de alimentos y la ganadería (Hall e Ismail, 1981).

Desde la firma del Acuerdo General de Paz (AGP), Sudán del Sur ha reconocido, al menos formalmente, la importancia del papel de las mujeres y su contribución a los procesos de negociación de la paz, aunque sea escasa. Por ello, han establecido leyes y políticas explícitas sobre la igualdad de género. La Constitución de Transición y la Carta de Derechos de 2011 ofrecen garantías para la igualdad de hombres y mujeres. Reconoce las desigualdades históricas entre mujeres y hombres en Sudán del Sur y establece una cuota de acción afirmativa del 25% para las mujeres en los órganos legislativos, ejecutivos y de participación política. Como resultado, las mujeres representan actualmente el 26,5% de la Asamblea Legislativa Nacional (No Safe Place, 2017).

Mujeres de Sudán del Sur: Marginación, conflicto y desplazamiento

Las personas desplazadas internas de Sudán del Sur, especialmente las que vivían en el norte, se enfrentaron a múltiples niveles de discriminación. Además de la pobreza, las mujeres, en particular, se enfrentaban a muchos problemas culturales, como la asimilación forzada, por ejemplo, la práctica de la MGF para conseguir la aceptación cultural (Abusharaf,



Desplazados internos en el campamento de Zam Zam en las afueras de El Fasher, Sudán. Foto ID 180277. 05/06/2008. Zam Zam, Sudán. Foto de la ONU/Tim McKulka

2009). La mayoría carecía de habilidades para competir en el mercado laboral del norte de Sudán, por lo que muchas trabajaban como vendedoras de comida y se dedicaban a oficios prohibidos por la ley de la shari'a, como la elaboración de alcohol y el trabajo sexual (ibíd.). No es de extrañar, por tanto, que la mayoría de las mujeres encarceladas en las prisiones de Sudán del Norte procedieran del sur, de las montañas Nuba, del sur del Nilo Azul, de Abyie y de Darfur, y que también fueran objeto de azotes y multas (Clancy, 2012).

Sin embargo, el sufrimiento de las mujeres no les impidió establecer la paz como una prioridad en su agenda. Las refugiadas del Sur en Kenia y Uganda consiguieron organizarse y formar grupos, entre los que se encontraban las secciones del Movimiento/Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés (SPLM) (Ahmed, 2014). Por primera vez, las mujeres del Sur lucharon en primera línea con los hombres por la independencia de Sudán del Sur y se dedicaron a labores de solidaridad y apoyo entre los desplazados.

Patrones de discriminación en Darfur: La violación como arma de guerra

Darfur ha sufrido un nivel diferente de conflicto y discriminación desde la década de 1980, asociado principalmente con el subdesarrollo y los recursos. Sin embargo, en el conflicto actual, especialmente entre 2003 y 2005, las mujeres fueron cada vez más víctimas de violaciones masivas y violencia sexual (Fricke y Khair, 2007). Más de 600.000 personas murieron y más de 2.000.000 fueron desplazadas.

Muchas de las víctimas de las violaciones y sus familias están profundamente traumatizadas, ya que la violación tiene como objetivo específico aterrorizar y someter a comunidades enteras, y afecta su tejido social. Se utilizó como arma de guerra. De hecho, la violencia contra las mujeres en Darfur se ha entretelado en la vida cotidiana y una mujer del norte de Darfur lo subraya de forma conmovedora: "Cuando salimos del campamento a buscar leña, preferimos ir como mujeres en lugar de enviar a nuestros hombres.

Cuando vamos sólo nos violan, pero cuando nuestros hombres van los matan, preferimos que nos violen y volver” (Hashim, 2009).

Las mujeres darfuri son conocidas por su importante contribución económica y su participación en las economías de mercado y agrícola, especialmente como vendedoras de artesanía, alimentos y trabajos de construcción. Las mujeres son las principales proveedoras económicas en muchas partes de Darfur, por lo que ocupan las esferas públicas. Su función principal es alimentar a sus familias, por lo que tienen campos más grandes en los que cultivan (mijo y sorgo) y almacenes de grano más grandes que los de sus maridos (Hashim, 2009). Los hombres, en cambio, sólo tienen que aportar la cantidad de grano que necesitan para su propio consumo. Esto les permite cultivar cosechas comerciales, como los cítricos de regadío, para comerciar, o dedicarse al trabajo asalariado, ya que se espera que ellos paguen todo lo que cuesta dinero, como la ropa, los utensilios, etc. Para ganar este dinero, los hombres pasan mucho tiempo fuera de sus pueblos, mientras que las mujeres se encargan de la vida cotidiana dentro del pueblo. Las mujeres son las “guardianas de la tierra” de facto. En la práctica, las mujeres necesitan tener algunos ingresos y los hombres no siempre están cerca para proporcionarlos cuando surge la necesidad. Esto ha llevado a los hombres del norte a pensar erróneamente que los hombres darfuri no son suficientemente responsables porque no controlan a sus mujeres (Hashim, 2009).

Aprendiendo de las mujeres de Sudán del Sur, las mujeres darfuri mostraron una presencia efectiva en las negociaciones de paz e insistieron en que debería haber una representación real de las mujeres en todos los asuntos relacionados con sus vidas y sus familias.



Uganda. Source: gov.uk

Las mujeres del norte de Sudán: Las privilegiadas

Al igual que muchas sociedades musulmanas regidas por la ley islámica, el norte de Sudán es fundamentalmente patriarcal por naturaleza, y está controlado exclusivamente por los hombres, cuya función principal es mantener el hogar económica y socialmente. Sin embargo, la posición subordinada de las mujeres en el Norte comenzó a cambiar con la introducción de la educación para las niñas durante el gobierno colonial y se utilizó como vehículo hacia la emancipación (Hall & Ismail, 1981; Badri, 2009; Hale, 1996). A principios de la década de 1930, las mujeres tendían a ser empleadas como enfermeras y comadronas, y trabajadoras sanitarias de la comunidad. Este empleo se consideraba adecuado y era socialmente aceptable, aunque con cierta reticencia. Durante la lucha por la independencia, entre finales de los años 30 y principios de los 40, las mujeres del norte comenzaron a organizarse y a formar sus propios sindicatos. A principios de la década de 1950, algunas mujeres empezaron a afiliarse al Partido Comunista, que en aquella época era el único partido político que abría sus puertas a las mujeres. Poco después, se formó la Unión de Mujeres (WU), que fue la primera organización que aglutinó a las mujeres sudanesas para trabajar colectivamente (Ahmad, 2014).

Violencia contra las mujeres: Prevalencia y manifestaciones

La mayoría de las formas y patrones de comportamiento violento han sido arraigados política, cultural y económicamente por la comunidad, la familia y el Estado en Sudán. Las leyes islámicas restrictivas han impuesto formas específicas de violencia, como la lapidación, la flagelación, el velo forzado y la restricción de la movilidad en la esfera pública. Otras formas de violencia contra las mujeres son el matrimonio forzado, la violación conyugal, la violencia doméstica y la mutilación genital femenina, así como las consecuencias del conflicto en curso del que el Estado es parte integrante, como el desplazamiento, la violación y la violencia sexual utilizadas como arma de guerra, el secuestro, la violencia étnica, la prostitución forzada y el tráfico de personas, etc. El acceso a la justicia es complicado y casi imposible debido al sistema de impunidad, especialmente entre los actores estatales, es decir, la policía, la seguridad, el ejército y las milicias; la ambigüedad de algunos artículos del código penal de 1991; el estigma de la violencia, especialmente la sexual; la falta de documentación de los casos; y la falta de datos desglosados sobre la violencia contra las mujeres.

Instituciones de opresión

La familia extendida desempeña un papel importante en la posición y la situación de las mujeres, y siguen existiendo marcadas distinciones de roles entre mujeres y hombres. La mayor parte de la vida y las actividades sociales giran en torno a la familia y son principalmente del dominio de las mujeres. En Sudán, la familia extendida no sólo es el lugar de opresión de las mujeres, sino también de apoyo. El matrimonio es otra institución crucial que frustra la vida de las mujeres sudanesas. El matrimonio permite tanto a las mujeres como a los hombres acceder al trabajo del otro en la división del trabajo por géneros, la procreación

y la reproducción social y el reconocimiento y el prestigio social (Gruenbaum, 2006). Además, el matrimonio es la única institución legitimada en la que las mujeres pueden ser sexualmente activas para satisfacer sus necesidades sexuales. La edad mínima para contraer matrimonio se equipara a la edad de discreción, que es de diez años, lo que equivale al matrimonio infantil. La Ley del Estatuto Personal de 1991, en su artículo 75, estipula que “la esposa será declarada desobediente si abandona el domicilio conyugal sin justificación legítima, es decir, si trabaja fuera o visita a sus padres sin permiso del marido” (Musawah, 2009).

Desde 1989, el gobierno islamista ha tomado medidas para restringir los derechos de las mujeres en nombre del decoro islámico. Se despidió a las mujeres de la administración pública, especialmente de las profesiones jurídicas y médicas, del ministerio de trabajo y del periodismo (Informe de Africa Watch, 1993). Además, las vendedoras ambulantes del sector informal fueron atacadas violentamente y se les impidió trabajar. Las medidas reguladoras que los islamistas impulsaron durante los primeros años de la década de 1990 muestran su preocupación por el aspecto, la vestimenta, la conducta, las leyes, las políticas, las normas estatales, los decretos y el orden de las mujeres (Nageeb, 2004). Estas medidas fueron destacadas específicamente por instituciones como las mezquitas, los medios de comunicación y el sistema escolar, y aplicadas por los tribunales de orden público, la policía y los servicios de seguridad (Nageeb, 2004). Los hombres, como guardianes sociales y religiosos, también tienen derecho a corregir la conducta de las mujeres de acuerdo con la normativa estatal o con el sentido “correcto” de los hombres musulmanes (ibid).

Además, el nuevo gobierno militar ha estado imponiendo agresivamente un programa islamizado en el sur, denominándolo Jihad (guerra santa) y formando nuevos grupos de milicias “sólo árabes” denominados Defensa

Popular, respaldados por el ejército (ibid). Las mujeres que apoyaban el proyecto islamista aprobaron la guerra de la Jihad proporcionando bienes, como oro y dinero personales, y sirviendo comida a los muyahidines (Hale, 1996). La violencia contra las mujeres por parte de la Defensa Popular, el ejército sudanés y el Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (grupo del sur de Sudán que luchaba por la paz y la igualdad) no estaba documentada, y la violencia contra las mujeres durante el periodo 1983-2005 no se destacó en los medios de comunicación internacionales.

Esta nueva formación se consideró una amenaza para el tejido social y cultural de los grupos no árabes de Sudán, especialmente en otras partes del país como Darfur, Abyie, las montañas Nuba y el sur del Nilo Azul (Kameir, 2012; Tonnessen, 2017). Esta islamización forzada con más restricciones contra las mujeres no se produjo en el vacío, y se creó para desbaratar la contribución de las mujeres a la economía y despojarlas de los derechos ganados en las décadas de 1960 y 1970. Desde principios de la década de 1980, Sudán se forjó y moldeó con patrones sociales, económicos y políticos restrictivos con la introducción de las leyes de la “sharia” conocidas como Leyes de Septiembre. La introducción del Hijab, y la aprobación de la tutela masculina para viajar dentro y fuera del país, minimizaron el acceso de las mujeres a la igualdad de beneficios, como la vivienda, que por ejemplo sólo está disponible para el sostén de la familia, que ahora es el marido. Estas medidas pusieron en peligro el acceso de las mujeres a los derechos económicos.

En septiembre de 2000, el Gobernador de Jartum emitió un decreto que restringía los derechos de las mujeres al empleo, a pesar de que el derecho de las mujeres al trabajo se consiguió en la década de 1960, junto con el derecho a la igualdad salarial, la licencia de maternidad y la pensión a principios de la década de 1970 (Ahmed, 2014). Promulgó un decreto que prohibía a las mujeres trabajar en hoteles,

restaurantes y gasolineras. Justificó esta medida como un medio para dignificar a las mujeres y situarlas en el lugar que les corresponde según el “... proyecto de civilización de la nación y en consonancia con nuestras tradiciones y valores de nuestra religión”(Ahmed, 2014). La justificación pone de relieve la remodelación de los roles de género en el ámbito público por parte de los islamistas.

La Ley de Orden Público, aprobada en el Estado de Jartum en 1996, que es emblemática de la politización de las identidades étnico-religiosas (árabe-islam), es también una declaración autorizada sobre la situación de las culturas minoritarias que viven bajo la sharia, así como de las mujeres (Abusharaf, 2009). Esta ley se aprobó para frenar las prácticas que el gobierno considera no islámicas y las personas que no la cumplen son llevadas a los tribunales. La ley abarca una serie de actividades. Afecta al empleo de las mujeres y hace cumplir la vestimenta islámica (hijab), prohibiendo la ropa tradicional de las mujeres (Abusharaf, 2009). Los tipos de delitos que llevan a las mujeres y a las niñas ante el tribunal son la vestimenta indecente, la venta de licor y los actos obscenos. Una vez que Sudán del Sur se separó en 2011, Jartum perdió el 75% de sus ingresos del petróleo y el gobierno sudanés comenzó a ampliar el número de tribunales de orden público en todo el país para aumentar agresivamente la recaudación de ingresos. Sabir Saeed, un abogado, dijo que ahora hay 22 tribunales policiales de orden público solo en Jartum y en casi todas las ciudades del país (Nuba Reports, 2017).

■ Conclusión

Es difícil hablar de la economía política y de la desigualdad de las mujeres en un contexto como el de Sudán y Sudán del Sur aislado de la desigualdad global y de sus medios y mecanismos neoliberales. Tanto en Sudán del Norte como en Sudán del Sur, el conflicto fue uno de los principales catalizadores del

deterioro de la posición de la mujer sudanesa, así como el principal instigador de la violencia de género. La discriminación legal, ya sea en virtud de las leyes islámicas o del derecho consuetudinario, controla la movilidad de las mujeres y restringe su vida pública. Esto demuestra claramente que el Islam no es la única herramienta utilizada para discriminar a las mujeres. Las normas sociales, la familia extendida, las reglas tribales y el matrimonio también son eficaces para imponer a las mujeres ciertas limitaciones. Las normas patriarcales, ya sean cristianas o musulmanas, tienen más poder sobre la participación social de las mujeres. Estas normas han adoptado diferentes formas, como los matrimonios forzados y de niños, la preferencia de los hombres sobre las mujeres, el estigma en torno a las cuestiones de sexualidad, la violencia sexual y los derechos reproductivos. ■

■ Bibliografía

- Abusharaf, R. (2009). 'Competing Masculinities: probing political Disputes as Acts of Violence against Women from Southern Sudan and Darfur'. In Hassan, S and Ray, C. (ed.), *Darfur and the Crisis of Governance in Sudan, A Critical Reader*. New York: Cornell University Press.
- AfDB. (2011). *The Political Economy of South Sudan: A Scoping Analytical Study*. Abidjan: African Development Bank (AfDB).
- Ahmad, M. (2014). 'The Women's Movement in Sudan from Nationalism to TransNationalism: Prospects for a Solidarity Movement', PhD thesis, York University, Toronto.
- Badri, H. (2009). *Women's movement in the Sudan*. 2nd ed. Omdurman, Sudan: MOB Center for Sudanese Studies.
- Clancy, D. (2012). *Falling through the cracks. Reflections on customary law and the imprisonment of women in South Sudan*. SIHA Network: vision printer.
- Fricke, A. and Khair, A. (2007). *Laws Without Justice: An Assessment of Sudanese Laws Affecting Survivors of Rape*. Washington, DC: Refugee International.
- Gruenbaum, E. (2006). *Sexuality Issues in the Movement to Abolish Female Genital Cutting in Sudan*. *Medical Anthropology Quarterly*, 20(1), pp.121-138.
- Hale, S. (1996). *Gender Politics and Islamization in Sudan*. *Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East*, 14(2), pp. 51-66.
- Hall, M. and Ismail, B. (1981). *Sisters under the sun: the Story of Sudanese Women*. Essex, England: Longman Group limited.
- Hashim, F. (2009). *Sudanese Civil Society Strategizing to End Sexual Violence against Women in Darfur*. In Hassan, S. and Ray, C. (ed.), *Darfur and the Crisis of Governance in Sudan, A Critical Reader*. New York: Cornell University Press.
- Kameir, E. (2012). *Perspectives on the Political Economy of South Sudan*. African Development Bank, Fragile States Unit.
- Makuei, Gabriel, Mali Abdollahian and Kaye Marion (2018). *Optimal profile limits for maternal mortality rate (MMR) in South Sudan*, *BMC Pregnancy and Childbirth*, 18:278 <https://doi.org/10.1186/>
- Musawah (2009). *Home Truths: A Global Report on Equality in the Muslim Family*. [en línea] Selangor: Musawah, pp.52-53. [\[online\]](#)
- Nageeb, S. (2004). *New Spaces and Old Frontiers*. Lanham MD: Lexington Books.
- No Safe Place (2017). *No safe place a life time of violence for conflict affected area South Sudan*. [\[online\]](#)
- Nuba Reports. 2017. 'Courts Target Poor Sudanese Women with Extortionate "Morality" Fines', *Nuba Reports*, 1 December, [\[online\]](#) (consultado el 6 de mayo de 2019).
- South Sudan Human Development Report 2015 (2015). *South Sudan Human Development Report*. UNDP, [\[online\]](#)
- Tonnessen, L. (2017). *Enemies of the State: Curbing Women Activists Advocating Rape Reform in Sudan*. *Journal of International Women's Studies*, 18(2), pp.148-155. [\[online\]](#)
- True, J. (2010). *The Political Economy of Violence Against Women: A Feminist International Relations Perspective*. *Australian Feminist Law Journal*, 32(1), pp.39-59.

■ Notas

1 - Con respecto a Sudán del Sur, este documento abarca el sur hasta la independencia en 2011 (de 2005 a 2011) y no incluye el estallido del conflicto interno en 2013.

En el sitio web de DAWN

www.dawnnet.org



Aparecen las agendas de la Economía Azul - Panel organizado Por DAWN Y Pang en Fiji. DAWN, en colaboración con la Red del Pacífico sobre la Globalización, organizó el 28 de febrero en Suva (Fiji) un panel titulado “Economía azul: ¿marco de desarrollo en evolución o humo y espejos?”. El objetivo del panel era reunir a diversas partes interesadas de la sociedad civil y del mundo académico para que compartieran sus perspectivas sobre el discurso del desarrollo de la economía azul.

[ver más >](#)



Los Ods Y La Construcción Del Movimiento Feminista - Por Gita Sen Este documento de Gita Sen, publicado en diciembre de 2018, se basa en las experiencias de la autora y de DAWN sobre el compromiso feminista con los procesos de las Naciones Unidas. Fue producido para el informe insignia de ONU Mujeres “Convertir las promesas en acción: La igualdad de género en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, publicado como parte de la serie de documentos de debate de ONU Mujeres.

[ver más >](#)



Igualdad de género en la economía digital: Cuestiones emergentes - por Anita Gurumurthy, Cecilia Alemany Billorou, Nandini Chami Este documento de Anita Gurumurthy, Cecilia Alemany Billorou y Nandini Chami forma parte del Proyecto de Justicia Digital. Se centra en las tecnologías digitales y señala la necesidad de enmarcar una agenda de desarrollo feminista en relación con el contexto posthumano. El documento esboza una hoja de ruta estratégica centrada en nuevos marcos jurídico-institucionales y modelos de gobernanza de datos.

[ver más >](#)

PUBLICADO EN FEBRERO DE 2023

Equipo de edición:

Kumudini Samuel
Natalia Uval
Damien Gock

DIRECCIÓN POSTAL

Development
Alternatives with Women
for a New Era (DAWN)
Global Secretariat,
JP Bayly Trust Building,
193 Rodwell Rd, Suva, Fiji

COMITÉ EJECUTIVO DE DAWN

Cai Yiping

Cecilia Alemany
Corina Rodríguez Enríquez
Gita Sen (*Coordinadora General*)
Kumudini Samuel
Florencia Partenio
Hibist Kassa
María Graciela Cuervo
(*Co-coordinadora general*)
coordinadora)

COMITÉ DIRECTIVO DE DAWN

Celita Eccher
Claire Slatter (*Presidenta*)
Sarojini Pillay
Sin Joan Yee
Vivienne Taylor

SECRETARÍA MUNDIAL DE DAWN

Administradora:

Sharan Sindhu

Oficial de programas:

Mereoni Chung

Oficial de finanzas:

Nai Sassen

Oficial junior de administración y finanzas:

Mei Veramu

Oficial de investigación junior:

Damien Gock

Asistente de administración y finanzas:

Ana Rakacikaci



Pulse aquí para acceder a los números anteriores de DAWN Informa.

SÍGANOS

@DAWNfeminist



DAWN Informa es una publicación de Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), una red de académicas y activistas feministas del Sur económico, comprometidas con la investigación feminista, el análisis del medio ambiente global, el trabajo por la justicia económica y de género, y el desarrollo sostenible.